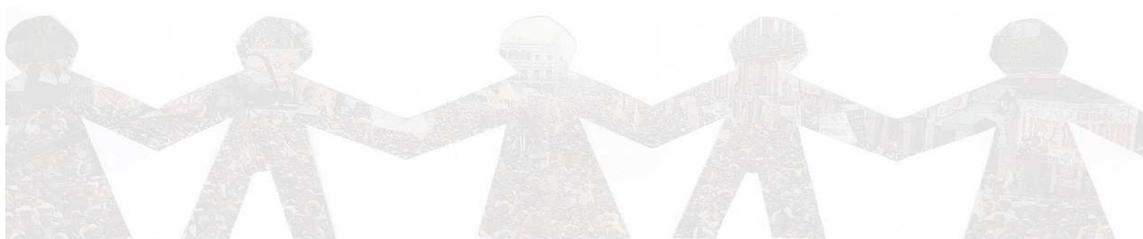


Universidad de Barcelona  
Facultad de Geografía e Historia  
Departamento de Geografía Humana  
Programa de doctorado: “Pensamento geográfico y organización del territorio”  
Bienio 2000-2002

LA VIABILIDAD DE LA AGRICULTURA FAMILIAR ASOCIADA: EL CASO  
DEL REASENTAMIENTO SÃO FRANCISCO, CASCAVEL, PR, BRASIL

Tesis doctoral que presenta  
MIRIAM HERMI ZAAR  
Para optar al título de Doctor en Geografía Humana

Director de la tesis: Dr. Horacio Capel Sáez  
Catedrático de Geografía Humana



Universidad de Barcelona  
2007

## CAPÍTULO 7

### **LAS POLÍTICAS ENERGÉTICAS, LA CONSTRUCCIÓN DE LA HIDROELÉCTRICA SALTO CAXIAS Y LA FORMACIÓN DEL REASENTAMIENTO SÃO FRANCISCO**

Este capítulo tiene como objetivo estudiar las políticas energéticas que llevaron a la construcción de la Hidroeléctrica Salto Caxias y el proceso de organización de los agricultores familiares que vivían en las tierras que iban a ser anegadas, con la finalidad de luchar por expropiaciones justas. Con esto pretendemos relatar los primeros pasos hacia lo que más tarde se denominó “Ressentamentos CRABI” y más específicamente *Reassentamento São Francisco*, lugar donde se localizan las explotaciones de los agricultores familiares que analizaremos en la tercera parte de esta investigación.

Dividiremos el capítulo en tres apartados. En el primero contextualizaremos la construcción de la Hidroeléctrica Salto Caxias y la consecuente formación del pantano, causa del desplazamiento de los agricultores que vivían a la orilla del *Rio Iguaçu*. Para esto haremos una breve historia del sector hidroeléctrico brasileño, que comprende tres etapas distintas. La primera, entre 1880 y 1940, caracterizada por las primeras experiencias eléctricas, iniciativa de empresas extranjeras; la segunda, entre 1930 y 1960, en la que destaca el intento del Estado de reglamentar el sector; y en una tercera etapa, de la década de 1960 hasta la década del 90, el control estatal absoluto a través de la creación de la Eletrobrás y de sus subsidiarias.

Un segundo apartado tiene como objetivo comentar, a partir de relatos, periódicos e investigaciones realizadas, cómo se produjo la organización de estos agricultores, y qué estrategia de luchas adoptaron para que sus reivindicaciones fuesen atendidas.

En un tercer apartado trataremos de los primeros acuerdos entre la empresa responsable de la presa (COPEL) y los expropiados, que en diversas ocasiones estuvieron paralizados debido a los *impasses* generados por la diferencia de opinión entre las partes involucradas. Las formas de presión y como evolucionaron las negociaciones reflejó además del “clima” de

incertidumbre que vivían los expropiados y la habilidad con que ambas partes resolvieron los problemas que les afectaban.

Por último, en un cuarto apartado nos detendremos en los resultados de un proceso que no tiene que ver con lo que sucedió con las hidroeléctricas construidas durante la década de 1970 y 1980: una expropiación “justa”; además del valor recibido por la propiedad y los bienes a ella inherentes, a los pequeños agricultores les abrió la posibilidad de vivir en reasentamientos organizados siguiendo en parte los patrones que tenían hasta entonces.

### **Las políticas energéticas brasileñas y su relación con la construcción de la Hidroeléctrica de Salto Caxias**

La electricidad, producto del esfuerzo de la ciencia y de la tecnología, se transformó a partir de las últimas décadas del siglo XIX, en una valiosa mercancía destinada a diferentes usos. La invención de la bombilla incandescente desechable (1879) por Thomas Edison y de la dínamo (1867) por el alemán Werner Siemens posibilitó el uso de transformadores, alternadores y el transporte de la energía de alta tensión. A éstas se sumaron las turbinas de vapor inventadas por Charles Parsons en 1889 y desarrolladas en sus aspectos básicos ya a fines del siglo XIX. Juntos, estos inventos fueron determinantes en la difusión de la electricidad, ya que favorecieron su diseminación y su consumo. Representó para las industrias una importante alternativa energética, al mismo tiempo que para los espacios urbanos, públicos y privados la posibilidad de nuevas formas de ocupación y uso.

#### *El comienzo y los primeros pasos hacia una política energética*

Durante el siglo XIX, a través del emperador Pedro II (1840-1889) y de los hijos de la incipiente burguesía que cursaban sus carreras en universidades europeas, Brasil se hizo presente en eventos internacionales como las exposiciones de Londres (1862), París (1867), Viena (1873), Buenos Aires (1882), San Petesburgo (1884) y nuevamente Paris (1889). En éstas, al mismo tiempo que se buscaba espacio en el mercado internacional para los productos brasileños, la mayoría de origen agrícola, las innovaciones allí presentadas, eran asimiladas y dentro de las posibilidades existentes entonces, aplicadas en el país de origen.

Como resultado, la primera demostración de iluminación eléctrica, alimentada por máquinas a vapor, se dio en la ciudad de Rio de Janeiro (entonces capital federal), en 1879, y la primera experiencia de generación hidroeléctrica se produjo en Diamantina, estado de Minas Gerais, en 1883, aún en el período monárquico.

A partir de 1889, año de la proclamación de la República, se instalaron las primeras centrales hidroeléctricas, y la práctica de iluminar las ciudades mediante farolas alimentadas con aceite y gas comenzó desaparecer.

Durante las dos primeras décadas del siglo XX, en las principales ciudades del litoral brasileño, la generación de electricidad dependía de pequeñas hidroeléctricas y de la termoelectricidad, en general iniciativa de empresarios, inversores extranjeros y, más raramente, de gobiernos municipales y estatales. En el área rural, era inexistente. Los sistemas de distribución eran locales o regionales, y los servicios precarios con constantes cortes de electricidad.

Al igual que sucedía en otros países, muchas empresas trataban de resolver aisladamente sus necesidades de energía, construyendo pequeñas “usinas” (fábricas de electricidad)<sup>1</sup>. Otras participaban de proyectos que tenían como meta atender demandas más amplias, teniendo casi siempre la participación de las administraciones municipales como cedentes de las concesiones.

En 1905 la *The Rio de Janeiro Tramway, Light and Power Co. Ltd.* de capital canadiense e inglés recibió autorización para explotar la electricidad, el gas y la telefonía en dicha ciudad, que fueron ampliados hacia el estado de São Paulo a través de la creación de la *São Paulo Light S.A Serviços de Eletricidade*<sup>2</sup>.

---

<sup>1</sup> Según Horacio Capel, en Gran Bretaña en 1907 y 1912 todavía el 60 % de la electricidad era producida por los mismos utilizadores y “hasta la primera Guerra Mundial en este país la electricidad usada en la industria en cualquier campo era en su mayor parte generada por los usuarios y no por una estación central. Lo mismo parece que sucedió en Cataluña.” (1994, p. 180)

<sup>2</sup> En otros países como por ejemplo España (Cataluña) el inicio de sus actividades se dieron seis años más tarde, en 1911. La obra *Las tres chimeneas* (1994) dirigida por Horacio Capel, en el capítulo VII trata de su creación y actividades desarrolladas durante las primeras décadas del siglo XX. También se pueden encontrar datos generales sobre los principales hechos realizados por la empresa en São Paulo y Rio de Janeiro, en la página web <http://www.lighttrio.com.br/institucional/cultura/seculolight>

Por los múltiples intereses que la nueva tecnología despertaba entre las grandes empresas que querían monopolizar el sector, surgieron en la década de 1920, amplias discusiones y con ellas la formación de una corriente nacionalista en oposición a los avances realizados por empresas extranjeras, que además de Rio de Janeiro y São Paulo ya se habían instalado en otras ciudades importantes, como es el caso de Porto Alegre y Curitiba.

En Porto Alegre, la iniciativa de implantar un sistema de iluminación fue de los franceses, a través de la *Compañía Fiat Lux*. En Curitiba esta misma iniciativa fue de la *Compañía de Água e Luz do Paraná*, bajo la dirección del estadounidense Howel Lewis, aunque a partir de 1910 la *Empresa de Eletricidade de Curitiba* pasó a las manos de la South Brazilian Railways Company Limited y en la década de 1920 al grupo norteamericano American & Foreign Power Co. (Amforp), que en 1928 adquirió también las empresas que abastecían Porto Alegre y obtuvo otras concesiones en el interior del estado de *Rio Grande do Sul*.

En el estado de Paraná, fue Curitiba, su capital, la primera ciudad en tener iluminación pública por electricidad en 1892. Primeramente a través de termoeléctricas y solo a partir de 1931 a través de la *Usina Chaminé*<sup>3</sup>. Sin embargo otros núcleos urbanos paranaenses importantes, como Ponta Grossa o Guarapuava, no quedaron atrás. A través de concesiones cedidas, mayoritariamente a empresas de capital extranjero, se construyeron termoeléctricas y pequeñas presas. Ponta Grossa, situada a cerca de cien kilómetros de Curitiba hacia el oeste, tuvo la primera termoeléctrica en 1905 y la primera hidroeléctrica un año más tarde. En la ciudad de Guarapuava, situada en la región central del estado, a pesar de haberse instalado una termoeléctrica en el año de 1910, la primera hidroeléctrica fue inaugurada solo en 1924.

En el Norte, Oeste y Sudoeste del estado de Paraná estas circunstancias se dieron más tarde, con la gran oleada inmigratoria que pobló estas regiones. Acompañado de un significativo crecimiento económico, principalmente a partir de la década de 1940, el flujo de personas desencadenó una demanda de energía eléctrica que exigía constantes aumentos en la oferta, hasta entonces proveniente básicamente de pequeñas termoeléctricas<sup>4</sup>. Así, por ejemplo, la

---

<sup>3</sup> En 1946 su potencia de 8.000 KW fue elevada a 12.000 y en 1952 a 16.000 KW con vistas a asegurar el abastecimiento de energía a las empresas regionales de mayor porte.

<sup>4</sup> Para poblar el Oeste y Sudoeste de Paraná (región fronteriza con Argentina y Paraguay), el gobierno de Getulio Vargas implantó a partir de 1938 el programa federal "Marcha para Oeste". Con esto estimuló la creación de empresas colonizadoras *gaúchas* (del estado de Rio Grande do Sul) y *catarinenses* (del estado de Santa Catarina) que organizaban la venta de tierras a sus paisanos lo que incrementó considerablemente, a partir de 1950, el flujo inmigratorio hacia estas regiones.

*Hidrelétrica Apucarana*, inaugurada en 1949 bajo la dirección de la *Empresa Elétrica de Londrina*, procuraba atender parte de la demanda en el norte del estado.

De la misma forma que se produjo en el estado de Paraná, en otros estados y regiones hubo un importante crecimiento de la demanda y con él la necesidad de reglamentar el sector. Debido a esto, a partir de la década de 1930, el gobierno de Getúlio Vargas tomó varias medidas. Entre ellas, instituyó el *Departamento Nacional de Produção Mineral* (DNPM) que a través de la *Divisão de Águas* pasó a controlar la explotación de la energía eléctrica. También se aprobó en 1934 el *Código de Águas* en el que se definían las normas para orientar a las empresas hidroeléctricas, y se estimuló a los estados a organizar los servicios técnicos y administrativos pertinentes al sector.

En 1940, con la creación del *Conselho Nacional de Águas e Energia Elétrica* (CNAEE), subordinado a la Presidencia de la República, se dio otro paso importante, ahora hacia un mayor control Estatal. Entre 1943 y 1946 se elaboró el *Plano Nacional de Eletrificação* que proponía la construcción de diversas centrales hidroeléctricas de pequeño y mediano portes<sup>5</sup>.

Como resultado, el gobierno federal creó, en 1948, la *Companhia Hidrelétrica do São Francisco* (CHESF) con el objetivo de explotar la capacidad hidroeléctrica del *Rio São Francisco*, pero no consiguió dar continuidad a la nacionalización del sector. El gran número de congresistas que defendían el control por el capital privado de las empresas de energía eléctrica hizo que durante cerca de siete años (1954 a 1961) la propuesta de la creación de una empresa estatal que coordinase el sector no fuera aprobada.

#### *La creación de la ELETROBRAS: su papel en la estatalización del sector eléctrico brasileño*

Solo en el inicio de la década de 1960, el *Plano de Metas* elaborado por el gobierno de Juscelino Kubitschek de Oliveira (1956-61) reiteraba la intención del Estado en invertir en las infraestructuras necesarias para el desarrollo del país; esta intervención se consolidó con la creación del *Ministério de Minas e Energia* (1961) y, en el año siguiente, la instalación de las *Centrais Elétricas Brasileiras* (Eletrobrás).

---

<sup>5</sup> Sílvio Coelho dos Santos, *A Eletrobrás e suas subsidiárias: projetos termo e hidrelétricos no Sul*, 2002, p. 26-29.

Destacando los grandes objetivos económicos y sociales a alcanzar, el referido plan daba prioridad a las inversiones en los sectores de energía, transportes e industrias de base. Con relación a la potencia energética instalada, se preveía que ésta debería crecer un diez por ciento al año.

Para alcanzar tales objetivos fueron incorporados al *Ministerio de Minas e Energia (MME)*, el *Conselho Nacional de Águas e Energia Elétrica (CNAEE)* creado en 1940, la *Comisión Nacional de Energia Nuclear (CNEN)* y el *Departamento Nacional de Produção Mineral (DNPM)*, a través de su *Departamento de Águas*, que en 1965 fue sustituido por el *Departamento Nacional de Águas e Energia Elétrica (DNAEE)*<sup>6</sup>.

Bajo la dirección del *Ministerio de Minas e Energia (MME)*, el objetivo de las *Centrais Elétricas Brasileiras (Eletrobrás)* era planear y coordinar las actividades del sector eléctrico, técnica, administrativa y financieramente. Una meta que tuvo continuidad con la promulgación de la Constitución de 1988, en cuyos artículos 20, 21 y 176 se establece que compete al Estado explotar, directamente o mediante concesión, el aprovechamiento energético de los ríos situados dentro del territorio nacional<sup>7</sup>.

Para esto, la Eletrobrás siempre actuó como un *holding*, incorporando y creando diferentes empresas. Además de la *Compañía Hidrelétrica do São Francisco (CHESF)* y de FURNAS, implantó en 1968 las *Centrais Elétricas do Sul do Brasil (ELETROSUL)* y las *Centrais Elétricas do Norte do Brasil (ELETRONORTE)*, cada una de ellas abarcando una macro región, formada por varios estados. Dos empresas de ámbito estadual fueron también incorporadas, la *Light Serviços de Eletricidade S.A.* y la *Espírito Santo Centrais Elétricas S.A. (ESCELSA)*.

Según los estatutos, la Eletrobrás tiene poder para administrar y transferir a las empresas subsidiadas antes referidas, la ejecución de obras necesarias para la expansión de la capacidad instalada, mientras la distribución de energía, a su vez, está delegada a las empresas de los estados federados<sup>8</sup>.

---

<sup>6</sup> Sílvia Coelho dos Santos, 2002, pp. 97-99.

<sup>7</sup> Relatório de Impacto Ambiental, 1993, p. 1.4.

<sup>8</sup> Sílvia Coelho dos Santos, 2002, p. 99.

En la práctica, a pesar de muchos avances, no siempre este modelo centralizado mantuvo su coherencia interna. Políticamente el país vivió entre 1964 y 1985 bajo una dictadura militar, rígida y jerarquizada, lo que en este período facilitaba la imposición de planes y decisiones asumidos sin mayores negociaciones.

De cualquier modo, fue la Eletrobrás quién adoptó y socializó, en el país, la práctica del planeamiento a largo plazo, decidiéndose por una matriz esencialmente hidroeléctrica. También fue bajo su dirección que durante la década de 1960, a partir de la iniciativa del *Comitê de Estudos Energéticos da Região Sul* (ENERSUL) y de la obtención de un financiamiento internacional, se realizó un inventario del potencial hidroeléctrico de las regiones brasileñas *Sul* y *Sudeste*.

El objetivo era, a través del estudio realizado por un consorcio de técnicos canadienses, estadounidenses y brasileños denominado CANAMBRA, obtener informaciones que orientasen la planificación del desarrollo del sector eléctrico brasileño, predominantemente hidroelectricidad ya que Brasil posee el trece por ciento de este potencial mundial.

Para ello se realizó, entre 1967 y 1969, un gran inventario sistemático del potencial existente con “una propuesta de expansión de la capacidad instalada, obedeciendo un orden secuencial de implantación de los mejores emprendimientos de generación de energía, según un criterio primordial de eficiencia económica”. Una propuesta que incluía la interconexión de las centrales eléctricas entre diferentes regiones, a través de grandes sistemas regionales de transmisión de energía, como son los actuales sistemas Norte/Nordeste y Sul/Sudeste/Centro-Oeste, que en su momento representaba un cambio fundamental en la concepción de nuevos proyectos y en la forma de atender la demanda<sup>9</sup>.

El documento final de este estudio presentó un plan energético hasta 1980 y las dos principales cuencas implicadas fueron las de los ríos *Iguaçu* y *Uruguay*, además de un detallado inventario de otras cuencas menores situadas en la *Região Sul*, que abarca los estados de *Rio Grande do Sul*, *Santa Catarina* y *Paraná*.

---

<sup>9</sup> Gilberto Valente Canali, 2002, p. 111-112.

A partir de esto, las *Centrais Elétricas do Sul do Brasil* (ELETROSUL) volvieron su atención a estas dos cuencas, desarrollando diferentes estudios; en la cuenca del *Rio Uruguay* en un primer momento se vislumbró la posibilidad de construir 19 nuevas presas hidroeléctricas<sup>10</sup>.

Con relación al *Rio Iguaçu*, estos estudios concluyeron que en el tramo nacional del principal curso se podrían aprovechar diversas caídas, que del nacimiento hacia la desembocadura fueron clasificadas según se ve en el cuadro 7.1.

**Cuadro 7.1**

**Aprovechamientos hidroeléctricos en el *Rio Iguaçu* (según CONAMBRA)**

<i>Hidroeléctrica programada</i>	<i>Año que entró en funcionamiento y desactivación (si fuera el caso)</i>	<i>Localización (distancia en kilómetros de la desembocadura en el Río Paraná)</i>
São Mateus	-	813
Lança	-	674
Salto Grande do Iguaçu	De 1967 hasta 1980	610
Foz do Areia	1980	550
Salto Segredo	1993	446
Salto Santiago	1981	368
Salto Osório	1975	300
Julio de Mesquita Filho o Foz do Rio Chopim (afluente del Río Iguaçu)	De 1970 hasta 2000	300
Cruzeiro	-	284
Salto Caxias	1998	208
Capanema	-	150

Fuente: Companhia Paranaense de Energia Elétrica (COPEL), Hidrelétrica de Salto Caxias – Relatório de Impacto Ambiental, 1993, p. 1.2.

Sin embargo, contrariamente a lo ocurrido con relación a la cuenca del *Rio Uruguai*, en el caso del *Rio Iguaçu* la ELETROSUL compartió la explotación hidroeléctrica con la *Compañía Paranaense de Energia Elétrica* (COPEL). Así, las concesiones de la *Hidrelétrica Salto Osório* y de la *Hidrelétrica de Salto Santiago* fueron otorgadas a la ELETROSUL, mientras las concesiones de la *Hidrelétrica de Foz do Areia*, de la *Hidrelétrica de Segredo* y de la *Hidrelétrica de Salto Caxias* fueron otorgada a la COPEL, como veremos a continuación.

<sup>10</sup> Mayores detalles sobre este proyecto están en el mismo capítulo de la obra *Memória do Setor Energético na Região Sul*, pp. 111-129.

*La creación de la COPEL, su papel en la planificación hidroeléctrica del estado de Paraná y en la construcción de la Hidroeléctrica de Salto Caxias*

Con la intención de atender la creciente demanda mencionada anteriormente, el gobierno paranaense instaló en 1947, el *Departamento de Águas e Energia Elétrica* (DAEE) responsable de la elaboración de un *Plano Hidroelétrico Paranaense*, inspirado en el *Plano Nacional de Eletrificação*.

Sin embargo, dada la gran dificultad para obtener recursos externos y la necesidad de una organización más ágil y eficiente, el 26 de octubre de 1954 se creó la *Compañía Paranaense de Energia Elétrica* (COPEL). En la condición de empresa mixta, con el 86 por ciento de sus acciones pertenecientes al gobierno paranaense y al gobierno federal, a través de la Eletrobrás, recibió autorización para actuar como concesionaria de energía eléctrica en mayo de 1955. Poco después, en 1956, le encomendó la tarea de centralizar todas las acciones gubernamentales de planeación, construcción y explotación de energía eléctrica y servicios respectivos en el ámbito del estado de Paraná.

Instalada inicialmente en el norte de Paraná, en la ciudad de Maringá, y previendo la necesidad de organizar un sistema eléctrico propio, como estaba previsto en el *Plano de Eletrificação do Paraná*, obtuvo de parte del gobierno del estado la concesión de operar en importantes ríos paranaenses como el *Tibagi*, *Capivari-Cachoeira*, *São João*, *Mourão* y el *Iguaçu*.

Este hecho le dotó de las condiciones necesarias para que más tarde pudiera desarrollar proyectos que le permitieron interconectar regiones a través de “líneas de transmisión” o tendido eléctrico, facilitando el intercambio y garantizando la estabilización energética en el estado.

Los primeros pasos hacia este intento fue la construcción de las Presas Hidroeléctricas de *Campo Mourão*, *Santo Grande do Iguaçu* y *Chopim*. La segunda en operación entre 1967 y 1980 y la tercera entre 1970 y 1998. Ambas estaban localizadas en la cuenca del *Rio Iguaçu* y fueron desactivadas debido a la formación de los embalses de las Hidroeléctricas de Foz do Areia y de Salto Caxias respectivamente. En 1974 se inauguró la *Hidrelétrica Governador Parigot de Souza*, en las proximidades de Curitiba.

En la década de 1970, el sistema de interconexión dentro del estado y entre estados se ponía en marcha de forma gradual. Para que se transformase en un hecho consumado, además de comprar la concesión de algunas empresas privadas existentes, la COPEL debería lanzarse hacia otros proyectos todavía incipientes. Solo así cubriría las diferentes regiones paranaenses y tendría energía suficiente para concretar sus pretensiones. Para el primer caso adquirió hidroeléctricas ya existentes, como fue el caso de las *Hidroeléctricas Chaminé, Marumbi y Guaricana* situadas al este, en la *Serra do Mar*, de las *Hidroeléctricas de São Jorge, Apucarantina y Pitangui* localizadas en el *Rio Tibagi*, de las *Hidroeléctricas Rio dos Patos y Mourão* en el *Río Ivaí*, de la *Hidroeléctrica de Melissa* en el *Rio Piquiri*, y de las *Hidroeléctricas de Salto do Vau y Carvenoso* en el *Rio Iguaçu* (figura 7.1)

En cuanto a la segunda pretensión, su meta pasó a ser la explotación del *Rio Iguaçu*, que según los estudios realizados por CANAMBRA presentaba innumerables posibilidades de aprovechamiento hidroeléctrico.

Sin embargo, como ya hemos comentado, para esta última, tenía un contrincante, ELETROSUL, que por ser subsidiaria de ELETROBRAS y actuar en los estados del sur (*Paraná, Santa Catarina y Rio Grande do Sul*) tendría la preferencia, ya que podría transmitir a estos tres estados, la energía generada allí.

Este fue el motivo por el que perdió la concesión para la construcción de la *Hidroeléctrica Salto Osório*, el primer aprovechamiento después de realizados los estudios por CONAMBRA, y que entró en funcionamiento en 1978, y de la *Hidroeléctrica de Salto Santiago*, que entró en operación en 1981.

Se libró una ardua batalla burocrática para conseguir la concesión de la construcción de la *Hidroeléctrica Governador Bento Munhoz da Rocha Netto*, también denominada *Foz do Areia*. Acelerada su construcción debido al largo período de sequía que se produjo en 1977 en las regiones brasileñas *Sul y Sudeste*, que generó inquietudes por las perspectivas desfavorables respecto a la disponibilidad de energía, fue inaugurada en 1980, con cuatro unidades generadoras de 418MW. Con la entrada en operación de esta presa la generación propia de COPEL alcanzó, en esta fecha, 2,9 mil millones de KW, contra 1,9 mil millones del año anterior.

Con mayor oferta de energía se dio inicio al *Programa Especial de Eletrificación Rural*, que con más de 30.000 altas, que tuvo continuidad a través de otro programa, el *Clic Rural*. Los dos fueron responsables de la electrificación de gran parte de las propiedades rurales paranaenses.



Nuevos proyectos fueron elaborados para el aprovechamiento hidroeléctrico del Rio Iguaçu: la *Hidrelétrica Governador Ney Braga*, también conocida como Salto *Segredo* iniciada en 1987 y la *Hidrelétrica de Salto Caxias*.

A las pérdidas que provocaron las fuertes lluvias con el aumento del caudal en 1983 por daños en las presas y en los sistemas de distribución, se sumó una gran devaluación cambiaria del dólar frente al real, que profundizó la crisis económica generalizada que afectó al país durante la década de 1980. La salida encontrada para terminar la primera de las dos hidroeléctricas fue el *Programa de Pré-venda de Energia da Usina de Salto Segredo*, que tenía como meta atraer la participación de capital privado a cambio de garantías contra el racionamiento de energía<sup>11</sup>.

Concluida en 1993, dio paso a otro gran proyecto, la construcción de la *Hidrelétrica Salto Caxias*, aunque su construcción dependía de una toma de decisión con relación a otras presas también previstas en el mismo río.

Sobre éstas (Cruzeiro, Salto Caxias y Capanema), la previsión en construir tres presas en lugar de una se debía al hecho que en la desembocadura de un importante afluente del Rio Iguaçu, el Rio Chopim ya existía la Hidroeléctrica Foz do Chopim.

Una nueva evaluación técnica fue realizada y se llegó a la conclusión que era más ventajoso económicamente el aprovechamiento de los saltos Cruzeiro y Caxias en una única hidroeléctrica, aunque que ello implicara la eliminación de la Hidroeléctrica Foz do Chopim. Fue lo que sucedió cuando se optó por la construcción de la última presa paranaense que entró en funcionamiento en el siglo XX, la *Hidroeléctrica de Salto Caxias “Alta”*, responsable de los cambios que dieron como resultado la expropiación y el reasentamiento de cerca de un millar de agricultores familiares que vivían en la orilla del *Rio Iguaçu*. En lugar de mantener la Hidroeléctrica Foz do Chopim y construir las Hidroeléctricas de Cruzeiro y Salto Caxias “Baixa”, se optó por desactivar la de Foz do Chopim, no construir la de Cruzeiro, y en su lugar construir solo la de *Salto Caxias “Alta”* que por distar varios kilómetros de la “Baixa” hacia el nacimiento del Rio Iguaçu, anegó una superficie mayor.

---

<sup>11</sup> Para mayores detalles sobre el histórico de la *Companhia Eletrica do Estado do Paraná* (COPEL) y de las hidroeléctricas por ella construidas ver Frederico Reichmann Neto, 2002, pp. 185-197. Informaciones que parcialmente y de forma sucinta también pueden ser encontradas en la página <http://www.copel.com>

## **El proceso de lucha hacia una expropiación justa**

Como hemos visto hasta aquí, los estudios realizados por CONAMBRA y las decisiones posteriores de los técnicos posibilitaron, durante las décadas de 1980 y 1990, la construcción de cinco presas en el curso principal del Río Iguaçu. Las Hidroeléctricas de Foz do Areia, Salto Segredo, Salto Santiago, Salto Osório y Salto Caxias con sus respectivas áreas anegadas de 148 Km<sup>2</sup>, 83 Km<sup>2</sup>, 230 Km<sup>2</sup>, 63 Km<sup>2</sup> y 124 Km<sup>2</sup> hicieron que aproximadamente un 50 por ciento de la longitud del curso de este río fuera embalsada.

La Hidroeléctrica Salto Caxias fue construida entre 1995 y 1998, con 67 metros de altura y 1.083 metros de longitud. Utilizó 912.000 m<sup>3</sup> de CCR (*concreto (hormigón) compactado a rolo*) siendo la mayor de la América Latina y la octava del mundo en volumen utilizando esta técnica. Produce 1.240 MW (cuatro unidades generadoras de 310 MW) suficiente para cubrir las necesidades de cuatro millones de personas.

Anegó tierras de ocho municipios localizado en las Regiones Oeste y Sudoeste Paranaenses: *Capitão Leônidas Marques, Boa Vista da Aparecida, Três Barras do Paraná, Quedas do Iguaçu, São Jorge do Iguaçu, Cruzeiro do Sul, Boa Esperança do Iguaçu, Nova Prata do Iguaçu y Salto do Lontra*, situados en la figura 7.2.

Un hecho que, considerando las innumerables barbaridades ocurridas durante el período de la dictadura militar, hace que sociólogos, geógrafos y demás investigadores de ciencias humanas se pregunten: ¿cómo se produjo la expropiación de los agricultores que vivían en las tierras que fueron anegadas?

Es nuestro objetivo en este apartado relatar los episodios más importantes de una serie de hechos que culminaron en la formación de los reasentamientos CRABI. Para esto comenzaremos transcribiendo las primeras noticias que anunciaban la construcción de la presa:

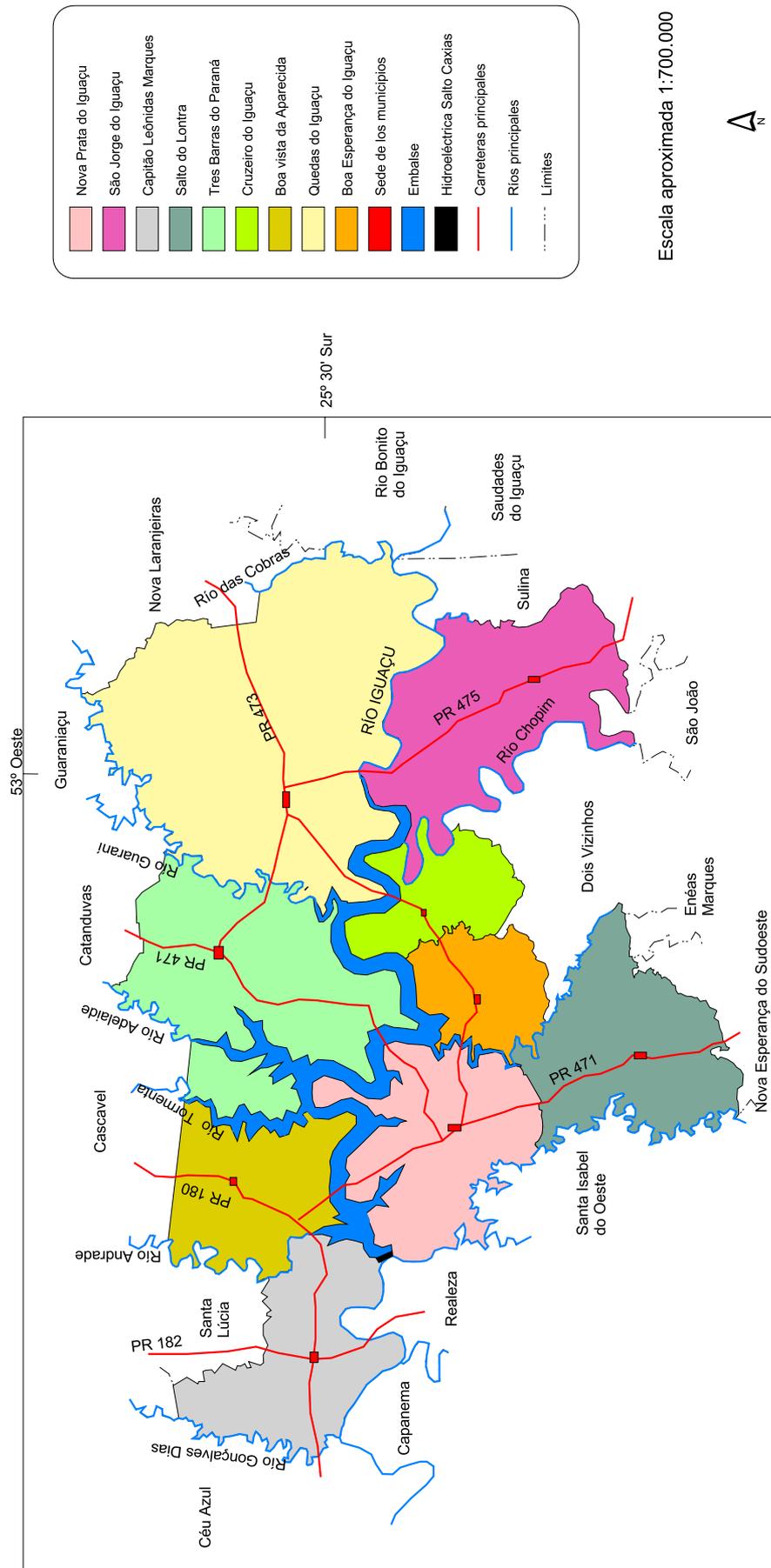
“ Os primeiros passos que vão conduzir à construção da Usina Hidrelétrica de Santo Caxias, que a Copel pretende colocar em funcionamento no final desta década, começarão a ser dados nesta semana”<sup>12</sup>.

---

<sup>12</sup> Periódico *Gazeta do Povo*, 8/11/1992, p. 13.

Figura 7.2

Hidroeléctrica de Salto Caxias- municipios afectados



Elaborado por la autora a partir de cartas topográficas del Ministerio do Exército, escala 1:50.000, mapa del estado de Paraná con división municipal (digital) y cartas elaboradas por la COPEL en escala 1:10.000 (papel) y digital

El tema volvió a ser noticia tres meses más tarde cuando bajo el título *Copel se prepara para construir a nova Usina de Salto Caxias* se publicaron más detalles sobre la obra. Entre ellos, que tendría capacidad para añadir al mercado consumidor de las regiones brasileñas *Sul*, *Sudeste* y *Centro-Oeste*, cinco mil millones de kilovatios-hora anuales de electricidad, equivalente a la mitad del consumo anual del estado de Paraná. Una necesidad de aumento de producción energética que era justificada por el presidente de la Concesionaria COPEL con estas palabras:

“Hoje a recessão motiva o adiamento de investimentos em novas usinas, mas quando ela terminar e a economia começar a andar, o colapso energético será inevitável. A crise (energética) não tem data marcada, porém é cada vez mais certa”<sup>13</sup>.

Preguntados sobre este período, los agricultores entrevistados se manifestaron así:

“A gente ficou preocupado, de saber se ía receber (dinheiro) porque nos outros lugares eles faziam as obras e não pagavam nada. Todo mundo ficou preocupado né? Muita gente vendeu a terra por causa da hidrelétrica.”

“Foi de muita preocupação, porque nós ia ter que ir embora. A gente ouvia que ia ser feita a barragem, como de fato a Copel começou a fazer a barragem sem negociação nenhuma e nós não sabia quanto ia receber, se ia receber ou não ia. E, a Copel estava construido a barragem...”<sup>14</sup>

Una confrontación de posiciones que según Ilse Scherer-Warren, importante investigadora del tema relacionado con los movimientos sociales, es frecuente. Según ella:

“Por parte do Estado e de seus técnicos predomina uma racionalidade instrumental/economicista, tanto para justificar as grandes obras ou deternimamos tipos de política agrária, como para pensar os custos sociais da desapropiação de camponeses para a construção de hidroelétricas, apenas em termos monetários.

Do lado dos camponeses, a racionalidade política vem associada ao valor simbólico atribuído a vários aspectos de seu cotidiano de suas tradições (bens culturais, comunitários, religiosos, etc.). Todos estes elementos são partes fundamentais de seus projetos de vida, al lado do valor atribuído à terra. Estes elementos simbólicos são de difícil (ou impossível) mensuração monetária, quando de sua fragmentação em face da migração forçada, mas nem por isso deveriam se negligenciados.”<sup>15</sup>

### *La organización de los expropiados*

Para los habitantes del oeste y sudoeste paranaenses, la construcción de hidroeléctricas y las consecuencias tras la formación de embalses no eran novedades. Durante la década de 1970, la *Hidroeléctrica Binacional Itaipu*, construida entre Brasil y Paraguay en el Río Paraná, entre Foz do Iguaçu y Guaira representó, además de importantes cambios en la biodiversidad local,

<sup>13</sup> Periódico *Folha de Londrina*, 29/3/1993, p. 10.

<sup>14</sup> Entrevista personal realizada en octubre de 2002 a dos agricultores pertenecientes al Reasentamiento São Francisco, localizado en el municipio de Cascavel.

<sup>15</sup> Ilse Scherer-Warren, en *Redes de Movimentos Sociais*, 1996, p. 75-76.

el anegamiento de varios núcleos urbanos y 42.000 personas afectadas, entre las cuales 38.000 eran trabajadores agrícolas (propietarios y no propietarios). Muchas de estas familias no recibieron nada por sus tierras y ni por las construcciones en ellas existentes<sup>16</sup>.

Igualmente, desde finales de la década de 1960 las diversas presas construidas en el Rio Iguaçu dieron muestras de cómo éstas cambiaron la vida de los agricultores expropiados.

También es importante mencionar que en la mayoría de estos proyectos hubo en mayor o menor grado algún tipo de organización por parte de los afectados, y que éstas experiencias sirvieron de ejemplo a los que pasaron por el proceso más tarde. Fue lo que sucedió con la construcción de la presa de Salto Caxias. A escala regional ya habían sido creados, como consecuencia de la formación del embalse de Itaipu y como forma de resistencia y garantía de nuevas tierras, el MASTRO (*Movimento dos Agricultores Sem Terras do Oeste Paranaense*) y la CRAB (*Comissão Regional de Atingidos pelas Barragens do Rio Uruguai*).

Lo mismo sucedió cuando se propuso la construcción de la presa de Salto Capanema, luego cancelada. En esta ocasión el Sindicato de Trabalhadores Rurais, organizaciones religiosas y ecológicas incentivaron a las familias afectadas para que se organizaran. El resultado fue, en 1985, la formación de la CRAB (*Comissão Regional dos Atingidos por Barragens* en el estado de Paraná) en la que se reunieron además de los presidentes de los *Sindicatos dos Trabalhadores Rurais do Sudoeste e do Oeste do Paraná*, representantes de las familias de agricultores, representantes de la CPT (*Comissão da Pastoral da Terra*) y representantes de otras entidades regionales y del estado de Paraná.

Todas estas organizaciones en 1997 y 1998 fomentaron en Brasil la fundación del MAB (*Movimento Nacional dos Atingidos por Barragens*) y en el ámbito internacional la Comisión Mundial de Presas.

Con relación a las organizaciones de agricultores expropiados, Scherer-Warren, comenta que actuaciones como ésta permiten una interrelación igualitaria entre las dinámicas de dos campos sociales autónomos. Por un lado, el Estado, en cuanto aparato, por poseer un campo institucional de actuación privilegiada; y por otro, la sociedad civil, que por su fuerza

---

<sup>16</sup> Para conocer como se dio el proceso de organización de los afectados por la Binacional de Itaipu y su reivindicación por expropiaciones “justas” consultar de Guimar Germani *Os expropiados de Itaipu. O conflito: Itaipu x colonos*, 1982 y de Juvencio Mazzarolo *A taipa da injustiça*, 1980.

numérica y vital en la producción social, podrá tener una actuación más o menos agresiva en la transformación de la sociedad<sup>17</sup>.

Las alianzas que se establecen, según Scherer-Warren, son necesarias para conducir el movimiento más allá de sus reivindicaciones inmediatas, pues para que se concrete un proyecto más global, se necesita la articulación de diferentes fuerzas organizadas de la sociedad civil y de su representación a través de partidos políticos<sup>18</sup>.

Fue lo que sucedió en este caso. El año de 1989 estuvo marcado por una serie de reuniones de representantes de comunidades y organizaciones para analizar los impactos que causaría la construcción de la Presa de Salto Caxias y el 28 de junio de 1990 durante un seminario que contaba con la participación de diversas entidades y organizaciones - como la CRAB/RS-SC, la CPT y la ASSESSOAR (Associação de Estudos, Orientação e Assistência Rural), representantes de sindicatos, de partidos políticos de izquierda y de las comunidades afectadas - se creó la CRABI (*Comissão Regional dos Atingidos por Barragens no Rio Iguaçu*).

Las reuniones en las comunidades se intensificaron. La formación de liderazgos y la búsqueda de experiencias vividas en la construcción de otras presas tenía como objetivo informar y aclarar las dudas de los agricultores con relación a la obra.

Frente a COPEL eran innumerables los argumentos presentados por la CRABI para que esta obra no fuera realizada. Uno de ellos era que en lugar de una presa grande, se hicieran dos menores. Solo así los afectados serían 500 familias en lugar de 2.000, ya que para la misma producción de energía el área anegada sería de solo el 30 por ciento.

También se alegaba que los impactos sociales producidos en Brasil con la construcción de presas ya habían implicado la emigración de más de 200 mil familias, que el sector eléctrico era responsable del 25 por ciento de la deuda externa, que la energía generada en Salto Caxias

---

<sup>17</sup> Scherer-Warren 1996, p. 53.

<sup>18</sup> Scherer-Warren 1996, p. 59.

no se destinaría al oeste de Paraná, sino a los centros industriales de norte de Paraná y de São Paulo<sup>19</sup>.

A los argumentos de que la hidroeléctrica traería progreso a los municipios que tuviesen sus tierras anegadas, la CRABI contestaba que este “progreso” sería temporal, esto es, mientras duraba la obra, ya que estaba relacionado con la llegada de técnicos y trabajadores braceros.

Paralelamente, se intensificaron los esfuerzos de negociación en el sentido que, si no fuera posible continuar en la explotación, se buscara una garantía de reasentamiento para unos y de precios justos para la compra de una nueva propiedad para otros.

Con el objetivo de adelantar la toma de decisiones por parte de la empresa constructora, los futuros expropiados aprovecharon el Día Nacional del Agricultor en Brasil (25 de julio de 1992) para realizar su primera e importante manifestación (figura 7.3). Hecho que el periódico *O Estado do Paraná* recogió con estos términos:

“Cerca de 2,5 mil productores rurales fizeram uma manifestação no último dia 25, em Nova Prata do Iguaçu, protestando contra a construção da Usina de Salto Caxias. São proprietários de terras nos municípios de Três Barras do Paraná, Boa Vista da Aparecida, Dois Vizinhos, Capitão Leônidas Marques e Nova Prata do Iguaçu. Com a construção da barragem, com previsão de início em 1994 e término para quatro anos depois, 124 quilômetros quadrados de terras produtivas, nestes cinco municípios ficariam submersas, desabrigando 3,5 mil famílias de pequenos e médios produtores rurais.

A Comissão Regional de Atingidos por Barragens no Rio Iguaçu (Crabi), foi quem organizou o protesto, que visa única e exclusivamente sensibilizar as autoridades para com as reivindicações das famílias que serão diretamente atingidas pelo represamento e formação do lago da usina. José Uliano Camilo, secretário da entidade, afirma que os produtores estão abertos às discussões, mas que, no entanto não abrem mão de suas exigências: a resolução de todos problemas sociais antes do início das obras, com a indenização à base de troca terra por terra no próprio município onde reside a família e o reassentamento dos sem-terras que trabalham na área”<sup>20</sup>.

La última parte del texto publicado revela una de las reivindicaciones más importantes para el movimiento: la de que solo aceptarían la expropiación con la entrega de otra propiedad de características similares a las que poseían los expropiados. Se trataba, por lo tanto, de cambiar una propiedad por otra similar en el mismo municipio, y no por dinero, que como mostraba la experiencia de otras expropiaciones, fue insuficiente para la compra de una explotación en condiciones similares. Además de esto, había que solucionar los problemas que la formación del embalse traería a los trabajadores rurales arrendatarios, medieros o empleados de

<sup>19</sup> Estos fueron algunos de los argumentos presentados durante la 10ª Romaria da Terra, realizada en 1993, bajo el título *Águas para a vida e não para a morte*, organizada por la CPT y con apoyo de las demás organizaciones populares.

<sup>20</sup> Periódico *O Estado do Paraná*, 25/7/92, p. 7.

propiedades mayores, que se quedarían igualmente sin su principal medio de mantenimiento, debido a la inundación del área.

**Figura 7.3**

**Manifestación protagonizada por los afectados el 25 de julio de 1992**



Fuente: CRABI.

Para resolver también esta cuestión, la formación de reasentamientos pasó a formar parte de la lista de reivindicaciones. Sobre su organización se solicitaba que las comunidades de los ocho municipios afectados, cincuenta y dos en total, la mayoría formadas por pequeños agricultores, no fuesen disgregadas y sus núcleos comunitarios fuesen mantenidos en el futuro reasentamiento.

Se solicitaba esto para que con la mudanza no se perdiesen los aspectos relacionados con el personal, la vida cotidiana y en comunidad, con los lazos de parentesco y de amistad que pervivían durante años y en muchos casos décadas.

Eran éstas las reivindicaciones de los futuros expropiados. Para esto mantenían la decisión de no aceptar el inicio de la obra antes de que se firmasen acuerdos. Acuerdos que su contrincante, la Compañía Paranaense de Energía Eléctrica (COPEL) no demostraba especial interés en firmar; además se adelantó y dio los primeros pasos hacia la construcción de la obra, con el inicio de los trabajos, que consistían en la elaboración de proyectos básicos de ingeniería y estudios de impacto ambiental. Para ello, convenció a algunos agricultores familiares para que permitiesen la entrada en sus propiedades con el objetivo de realizar levantamientos topográficos y colocación de mojones demarcando el área en que se realizaría la obra principal.

Esta actitud indignó a muchos agricultores, pero fue tolerada por el movimiento durante un cierto tiempo. Finalmente en el mes de abril de 1993, unos 500 agricultores hartos de ser “ignorados” decidieron arrancar los mojones que señalaban el área de las obras. Una posición que fue justificada así por José Camilo, secretario de la CRABI:

“Los agricultores sentem-se traídos pela Copel que não cumpre o que promete e traz muita inseguridade para os colonos da região. No reassentamento de Segredo 1, a Copel se comprometeu a entregar casas de de 63 metros quadrados para acomodar as famílias desabrigadas, mas os agricultores receberam casas de madeira com apenas 18 metros quadrados. Não somos contra o desenvolvimento e o progresso, mas não podemos aceitar o pouco caso com que tratam os trabalhadores do campo”<sup>21</sup>.

Y, ratificada por otro agricultor expropiado:

“Sim foi reunido, foi queimado os piquetes da Copel, para daí ela negociar com nós. Mas ela não queria a negociação... depois que foi aberto a negociação”<sup>22</sup>.

Coincidiendo plenamente con esta postura de “desobediencia civil” que refleja la negación del modelo político existente deslegitimando las decisiones tomadas autoritariamente por el Estado, las cuales favorecieron históricamente los intereses de las clases dominantes<sup>23</sup>. En este caso la presión popular tenía como objetivo presionar al gobierno del estado y a la COPEL para que el proceso de negociaciones se pudiese en marcha.

Cada día la incertidumbre generaba más resistencias. Debido a esto la empresa responsable de la obra (COPEL) decidió constituir el 24 de junio de 1993 un Grupo de Estudios Multidisciplinar (GEM), con el objetivo de acompañar las acciones, los proyectos dirigidos a la construcción de la Presa Hidroeléctrica y el proceso de expropiación. Este grupo estaba

<sup>21</sup> Periódico *Folha de Londrina*, 15/4/1993.

<sup>22</sup> De acuerdo con entrevista realizada en noviembre de 2002 con un de los agricultores expropiados que participó activamente del proceso y que actualmente vive y trabaja en uno de los reasentamientos.

<sup>23</sup> Según Ilse Scherer-Warren, 1996, p. 54.

compuesto por representantes de la COPEL, de las Secretarías del Estado de Paraná, del Instituto Ambiental de Paraná, de la Compañía de Saneamiento del Estado, del Departamento Estatal de Carreteras, así como por alcaldes, concejales municipales, sindicatos patronales y de trabajadores, universidades, asociaciones de vecinos, iglesia y entidades que representaban a los futuros expropiados.

Se crearon grupos de trabajo que, tenían como meta estudiar aspectos específicos del proyecto y sus implicaciones, como el desplazamiento de la población afectada, el soporte y desarrollo del área de influencia, además del control de la obra y la protección del ecosistema.

Sin embargo había un problema: a la COPEL no le interesaba que los agricultores se asociasen para defenderse colectivamente y por esto la CRABI todavía no era reconocida por ésta ni por el gobierno estadual, como representante oficial de los expropiados. Los intentos de negociar las expropiaciones directamente con algunos agricultores que poseían mayor superficie de tierra, sin establecer precios que abarcarían a todos los expropiados y tampoco la posibilidad de formar reasentamientos, llevó a los agricultores a organizar, en Barra Bonita, Municipio de Tres Barras, una nueva manifestación el día 25 de julio de 1993, de nuevo en el Día del Agricultor en Brasil. El propósito era acelerar las negociaciones, ya que el mayor temor se centraba en que éstas quedasen a posteriori, para el último momento, cuando el embalse ya estuviese formando, y se tratase de un hecho consumado.

En ese acto público, en el cual estuvieron presentes además de los futuros expropiados, líderes políticos, diputados federales y entidades que seguían el proceso, las protestas se centraron en la falta de definiciones por parte de la COPEL con el proceso de expropiación; al mismo tiempo se dejaban claras las exigencias de los expropiados: que en esencia querían cambiar sus tierras por otras en áreas previamente definidas, para su reasentamiento.

Esta exigencia, basada en hechos que se habían dado con la construcción de otras presas paranaenses, fue comentada por el periódico *Correio do Trabalhador*:

“O Estado do Paraná já perdeu áreas imensas de terras férteis com as dezenas de barragens construídas no seu território nos últimos 30 anos. Pagamos um preço social e econômico muito alto para produzir energia para as indústrias do Estado de São Paulo. Os ‘royalties’ recebidos desde o ano passado pelos municípios atingidos não pagam os danos sofridos pelas famílias expulsas pelas águas. Só a represa de Itaipu desalojou cerca de 40 mil pequenos proprietários rurais. Indenizados por um preço vil, boa parte destas famílias não conseguiram reconstruir a vida em outro lugar e hoje vivem em favelas nas grandes

ciudades ou como sem-terras à beira das estradas. Para não ter o mesmo destino, os agricultores de Três Barras do Paraná e Nova Prata se organizaram para defender os seus direitos”<sup>24</sup>.

Por su parte el periódico *Jornal do Estado* transcribía las declaraciones de Hélio Mecca, coordinador de la Comisión Regional de los Afectados por Embalses en el estado de Rio Grande do Sul, el cual, basado en experiencias anteriores, señalaba claramente que son siempre los pequeños agricultores los que pierden en procesos como este:

“É uma ilusão pensar que quando se constrói uma barragem, os pequenos agricultores atingidos pela formação dos reservatórios serão indenizados corretamente a preços justos, ou reassentados em terras tão boas quanto as que perderam. A larga experiência que temos sobre o assunto, mostra que isso nunca acontece. Nós não somos contra o progresso e a geração de energia elétrica é um componente fundamental. O problema é quando a Eletrosul decide construir mais de 20 barragens no rio Uruguai inundando terras férteis, expulsando os pequenos agricultores e em consequência, desencadeando um processo de favelização nas cidades”<sup>25</sup>.

El coordinador se refirió en su explicación al Plan Decenal de Expansión de Generación de Energía de la Eletrobrás, que, al igual que sucedía en el Río Iguazu, se planeaba la construcción de varias presas en el Río Uruguay localizado más al sur, entre los estados de Santa Catarina y Rio Grande do Sul y entre Brasil y Argentina.

Esta concentración del día 25 de julio resultó doblemente favorable a los afectados. De un lado porque fortaleció la idea que la unión sería el factor fundamental hacia sus objetivos, y de otro porque sirvió para que sus contrincantes (COPEL y el gobierno paranaense) se diesen cuenta de la capacidad de organización que poseían<sup>26</sup>.

#### *La creación de campamentos como rechazo a la interrupción del proceso de negociación*

Algunos días después de esta manifestación y de unas negociaciones en las cuales la Compañía Eléctrica se había comprometido a no iniciar las obras antes de que existiera un entendimiento con los futuros expropiados, la misma empresa, como ya había sucedido varios meses antes, con la colocación de los mojones que delimitaban el área de la construcción de la presa, persuadió a dos agricultores, que permitieron se iniciase obras de perforación de rocas en sus propiedades, con la entrada de empleados y de máquinas.

<sup>24</sup> Periódico *Correio do Trabalhador*, julio de 1993, p. 3.

<sup>25</sup> Periódico *Jornal do Estado*, 27/7/1993.

<sup>26</sup> Para un análisis sociológico sobre la organización de estos agricultores así como la lucha por el derecho a la propiedad consultar la tesis de maestría de Eder Menezes defendida en 2004.

Esta actitud fue inmediatamente cuestionada por otros agricultores y por la CRABI, que resaltaron dos aspectos importantes. Uno de ellos, el hecho de que no se había concluido y aprobado el *Relatório de Impacto Ambiental* (RIMA), condición necesaria para la realización de cualquier obra; y otro respecto a la interrupción del proceso de negociación<sup>27</sup>.

Una asamblea el día 12 de agosto en la propiedad en que hombres y máquinas trabajaban llevó a una toma de decisión importante: la inmediata ocupación de ésta y la formación de un campamento en la misma, así como la retención de los trabajadores y de las máquinas que estaban siendo utilizadas por la COPEL, es decir “invadir” una propiedad que todavía no había sido expropiada.

Con esta actitud los afectados empezaron a llamar la atención de la sociedad, de los gobernantes y de los medios de comunicación. Esto se pudo ver en la postura crítica adoptada por el diputado estadual Ovidio Constantino (Partido dos Trabalhadores), cuando aludió al acampamiento:

“Ninguém deveria sair de lá sem ter a certeza que a COPEL lhes pagará uma indenização honesta, que lhes permita adquirir uma propriedade semelhante. Porque, do contrário, o destino desses agricultores e de suas famílias será, evidentemente a periferia das cidades”<sup>28</sup>.

Esta actitud recomendando que los agricultores deberían permanecer allí hasta que la COPEL discutiese el proceso de expropiación, partiendo de un representante del poder legislativo del estado de Paraná, representaba un apoyo de al menos una parte de los miembros de esta cámara legislativa y, en contrapartida un debilitamiento del poder autoritario de la COPEL.

Este campamento reivindicatorio estaba compuesto por unos 300 agricultores entre hombres mujeres y niños y permanecieron en la finca durante 40 días, impidiendo la continuidad de los trabajos de estudios geológicos y forzando el reinicio de las negociaciones (figura 7.4).

El hecho de formar campamentos, fue definido por Ricardo Abramovay (1985) como una estrategia activa que buscaba concienciar a los agricultores de sus derechos, lo que hizo con que la lucha se transformara en un proceso racional y político:

“Uma forma ativa de espera que dá existência política concreta ao desejo dos trabalhadores da terra. Os acampados não estão agindo segundo o instinto de quem quer terra, mas a partir da vontade racional e

<sup>27</sup> Periódico *Jornal do Estado*, 10/8/93.

<sup>28</sup> CONSTANTINO, Ovídio. A questão das hidrelétricas no Paraná. Informativo semanal do Gabinete do deputado Ovídio Constantino. *Notícias do Gabinete*. Curitiba, 19 a 26 de agosto de 1993. Esta materia también fue publicada en en los periodicos *Gazeta do Povo* de 23 de agosto de 1993 y *Cambota* de agosto de 1993.

da consciência de que existe um processo de luta e que neste processo a ação direta se combina com uma atividade política permanente<sup>29</sup>.

Durante el período de permanencia en los campamentos realizados por los expropiados de las presas, el reconocimiento colectivo de sus derechos se hizo más fuerte, lo que les llevó a la formación de una identidad social y política a partir de una mentalización mutua de la situación de carencia y como portadores del mismo derecho.

**Figura 7.4**

**Escena cotidiana en el campamento de la CRABI en 1993**

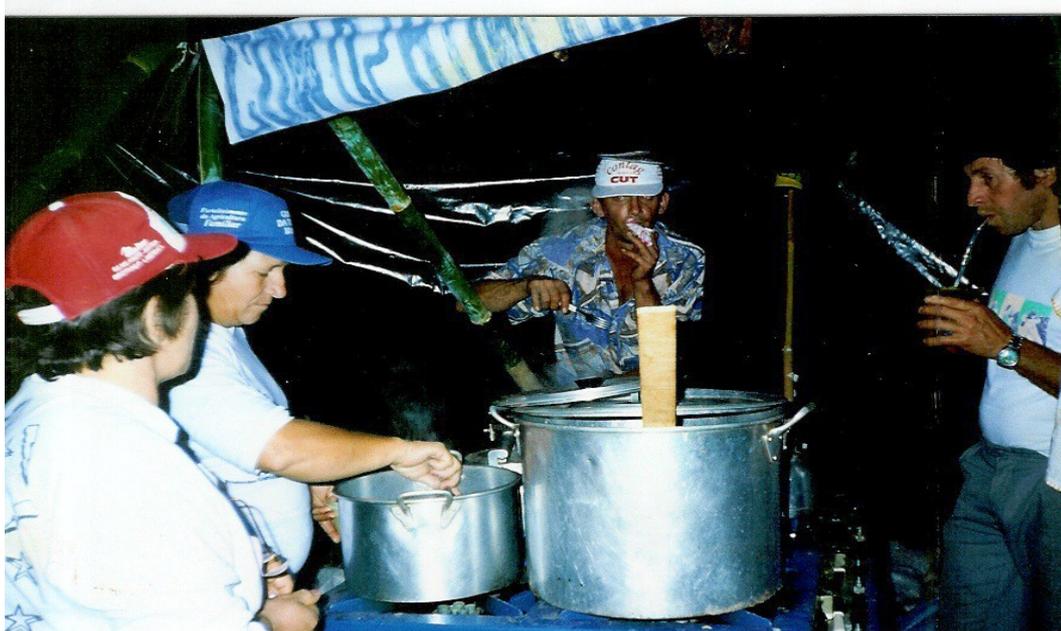


Foto realizada por uno de los agricultores y cedida por la CRABI.

Fue lo que se produjo en el caso de estos expropiados. El contacto diario y las discusiones durante los días de campamento contribuyeron decisivamente a su fortalecimiento colectivo y también para aclarar sus derechos y necesidades comunes así como las estrategias a seguir. Creemos que esto fue importante para que el grupo no se desmantelase tras la formación de los reasentamientos.

Sin ninguna definición que llevase a la conclusión del conflicto, antes al contrario, con la noticia de que en los otros procesos, la buena fe de los expropiados dio como resultado

<sup>29</sup> Citado por Ilse Scherer-Warren, 1996, p. 56.

expropiaciones injustas<sup>30</sup>, la movilización hacia la atención de sus reivindicaciones continuaba. Incluso desconfiaban de las promesas realizadas por la empresa responsable de la obra. Es lo que comenta este agricultor:

“Eles falavam que iam pagar bem nós, prá nos não se preocupar, mas a gente tinha informação de outras barragens que não foi tão bem igual eles falavam. E aí começemos a se organizar, o partido político começou a ajudar nós, a fazer reunião e esta luta foi muito tempo, foi eu acho que cinco anos com reunião, discussão e vários problemas, acampamos no local das obras e ficamos lá uns 40... 40 e pocos dias”<sup>31</sup>.

La postura enérgica de invadir el área tenía como objetivo obligar a la empresa responsable de las obras a paralizar éstas y reiniciar el diálogo con los agricultores. Un diálogo que poco a poco se fue reanudando, mediante el cual acordaron que no se haría ninguna expropiación de forma individual y que la CRABI pasaría a ser el único representante legal de los agricultores expropiados.

Una conquista que permitiría a esta entidad defender a todos los agricultores expropiados. De esta forma, los derechos adquiridos a través de las manifestaciones y reuniones serían extendidos a todos, y pasaba a ser prácticamente nulo el riesgo de que las expropiaciones se produjesen individualmente. Esta, como se produjo en otros casos hacía a los agricultores más vulnerables a las presiones ejercidas por la empresa COPEL. De esta forma, la CRABI, asesorada por otras entidades y asociaciones jurídicas podría conseguir mejores resultados, al intermediar en todos los procesos de expropiación, proporcionando a todos los mismos derechos y las mismas oportunidades en el momento del cobro de las indemnizaciones.

En las negociaciones que se produjeron mientras los expropiados continuaban acampados, también se decidió que la propuesta anterior, según la cual la expropiación se realizaría 90 días antes de la formación del embalse, sería sustituida por otra en que las expropiaciones se realizarían hasta un año y medio antes de la anegación de las tierras, una situación más beneficiosa que la anterior, pero que así mismo fue rechazada. Este se dio en base a las experiencias habidas con la construcción de las presas anteriores, en las cuales las negociaciones interrumpidas y dejadas para un período posterior, cuando el embalse estaba a

---

<sup>30</sup> Entre los muchos casos de expropiaciones injustas, citamos la de *Salto Segredo* en que, debido a la proximidad, grupos de expropiados de Santo Caxias fueron ver de cerca la realidad. Encontraron entre otros problemas, las casas de apenas 16 metros cuadrados en lugar de los 80 metros cuadrados prometidos, la falta de una infraestructura adecuada y de una asistencia técnica que permita la adaptación y el mantenimiento de los afectados.

<sup>31</sup> En entrevista realizada en diciembre de 2002, con un agricultor que anteriormente al proceso de expropiación, vivió durante 23 años en el municipio de Tres Barras do Paraná en la orilla del Río Iguaçu, con una pequeña área agrícola y dedicándose a tiempo parcial a actividades de comercio y prestación de servicios en su comunidad.

punto de ser formado, trajo mucha inseguridad a los expropiados. Así que, el miedo a que el mismo proceso se repitiera, llevó a insistir en que las expropiaciones deberían hacerse antes del inicio de las obras de construcción de la presa.

Aunque con algunas reuniones realizadas y algunos puntos aclarados, la situación entre la COPEL y los “agricultores invasores” que seguían en el área, continuaba tensa. La presencia de la policía bloqueando la entrada y salida de agricultores en el campamento desde el día 9 de septiembre tenía como objetivo dificultar e incluso impedir la alternancia de manifestantes, para que cansados desistiesen de la movilización:

“ (...) a polícia trancou a nossa entrada e não deixava ninguém entrar, só sair, para terminar nossa manifestação. Não deixava levar alimentos para os que estavam... Era prá terminar o movimento...”<sup>32</sup>

Esta tensa situación se mantuvo hasta el día 23 de septiembre cuando la finca fue desocupada tanto por la policía como por los agricultores, después de una reunión realizada en la Capital del Estado, Curitiba, en la cual participaron, además de miembros de la CRABI, la Federación de los Trabajadores de la Agricultura, de la Comisión Pastoral de la Tierra (CPT), la Central Única de los Trabajadores (CUT), alcaldes de los municipios afectados y diputados estatales. En esta oportunidad se pusieron de acuerdo en algunos puntos que orientarían el proceso de expropiación. Un aspecto importante sería la constitución de un grupo representativo de las entidades presentes que acompañarían y vigilarían el proceso de expropiación y el reasentamiento de las familias afectadas. También fue constituida una Comisión Parlamentaria en la Asamblea Legislativa del estado de Paraná.

Otro aspecto fue la entrega de la primera propuesta oficial firmada por la CRABI, acompañada de una petición para que la Compañía Paranaense de Energía Eléctrica anticipase la compra de tierras para los reasentamientos en las regiones Oeste y Sudoeste del estado de Paraná. Entre otros se solicitaron que fuesen catastradas, con la participación de sus propietarios, todas las explotaciones afectadas; que los medieros, parceiros, arrendatarios, empleados agrícolas y pequeños propietarios tuviesen preferencia en el proyecto de reasentamiento; que fuesen construidas por la COPEL casas, graneros, iglesias, escuelas, centros de salud y otras construcciones existentes en las explotaciones o en los centros comunitarios; que el suelo de la superficie destinada al reasentamiento fuese tratado con caliza a fin de disminuir su acidez; además de una determinada cantidad mensual en metálico

---

<sup>32</sup> Según entrevista realizada en octubre de 2002 con uno de los expropiados que participó activamente en el proceso de “invasión” y formación del campamento.

que permitiera el mantenimiento de los pequeños agricultores durante los primeros meses tras la mudanza. Para los agricultores que solicitasen la expropiación en dinero, el valor reivindicado era de 6,5 mil dólares por *alqueire* (un *alqueire* = 2,42 hectáreas) de tierra desnuda, ya que las construcciones inherentes a la propiedad serían pagadas aparte: 50 por ciento hasta enero de 1995 (cuando se iniciarían las otras de la presa) y lo restante un año más tarde.

También se insistía en la necesidad de elaborar un *Relatorio de Impacto Ambiental* comparando los dos proyectos existentes. Esto porque los expropiados estaban a favor de construir dos presas menores (Alternativa I – Caxias “Baixa y Cruzeiro) en lugar de una mayor (Alternativa II – Salto Caxias “Alta). La consecuencia, como podemos observar en el cuadro 7.2 sería, con relación a la primera opción, el anegamiento de una superficie menor y la expropiación de un número menor de explotaciones agrarias, cerca de 56 por ciento. Sin embargo tendría un mayor coste con relación a la construcción de las dos presas, al sistema de transmisión, operación y mantenimiento. Un motivo más que suficiente para que se optara por la Alternativa II.

**Cuadro 7.2**  
**Comparación del impacto entre los proyectos**  
**Salto Caxias “Alta” y Salto Caxias “Baixa”**

	Alternativa I (Caxias “Baixa” y Cruzeiro)	Alternativa II (Salto Caxias “Alta”)
Área anegada (Km <sup>2</sup> )	89,15	149,77
Nº de municipios afectados	8	9
Nº de explotaciones afectadas	1.332	756
Nº de personas afectadas	6.100	3.400
Área con pasto a ser anegada (ha)	2.560	5.880
Área con cultivos a ser anegada (ha)	1.220	3.000
Coste con el sistema de transmisión (dólares)	211.467.000	137.763.000
Coste relativos a la operación y manutención durante su vida útil (dólares)	51.200.000	48.300.000
Coste de la obra (dólares)	1.927.582.000	1.365.990.000

Fuente: Elaborado por la autora a partir de los datos del *Relatorio de Impacto Ambiental*, 1993, pp. 2.5-2.14.

El periódico *Folha de Londrina* hizo un rápido comentario sobre la reunión, destacando el contenido de la primera propuesta oficial firmada por la CRABI<sup>33</sup>:

“A proposta apresentada ao presidente da Copel determina a definição até janeiro de 95 (quando será iniciada a obra) de metade das indenizações de terras que serão alagadas, e o restante até um ano depois, a um preço de US\$ 6,5 mil por alqueire de terra nua. E, pede ainda, prioridade para parceiros, meeiros e

<sup>33</sup> En una reunión realizada en 30 de agosto de 1993, entre representantes de la COPEL y de la CRABI se acordó, finalmente, que a partir de esta fecha ésta última sería la representante legal de los expropiados.

pequenos proprietários, oferta de áreas para reassentamento em lotes individuais com aprovação prévia dos interessados”<sup>34</sup>.

Como se observa, se sellaron los primeros acuerdos que definían la necesidad de la formación de reasentamientos, como la fecha para el pago de la mitad de las expropiaciones, el precio de las tierras y la prioridad para los propietarios y no propietarios que trabajaban en tierras que iban a ser anegadas (figura 7.5).

Sin embargo el *Termo de Compromiso* entre la COPEL y la CRABI se produjo solamente en 15 de diciembre de 1993. En éste, la estatal reconoció a la CRABI como representante directa de las familias afectadas y comenzó a diseñar la forma de orientar el proceso de expropiación de las explotaciones y plantear las principales directrices que reglamentarían la adquisición de las superficies que se transformarían en reasentamientos.

### Figura 7.5

**Escena de reunión que culminó en acuerdos entre técnicos de la COPEL y la CRABI (1993)**

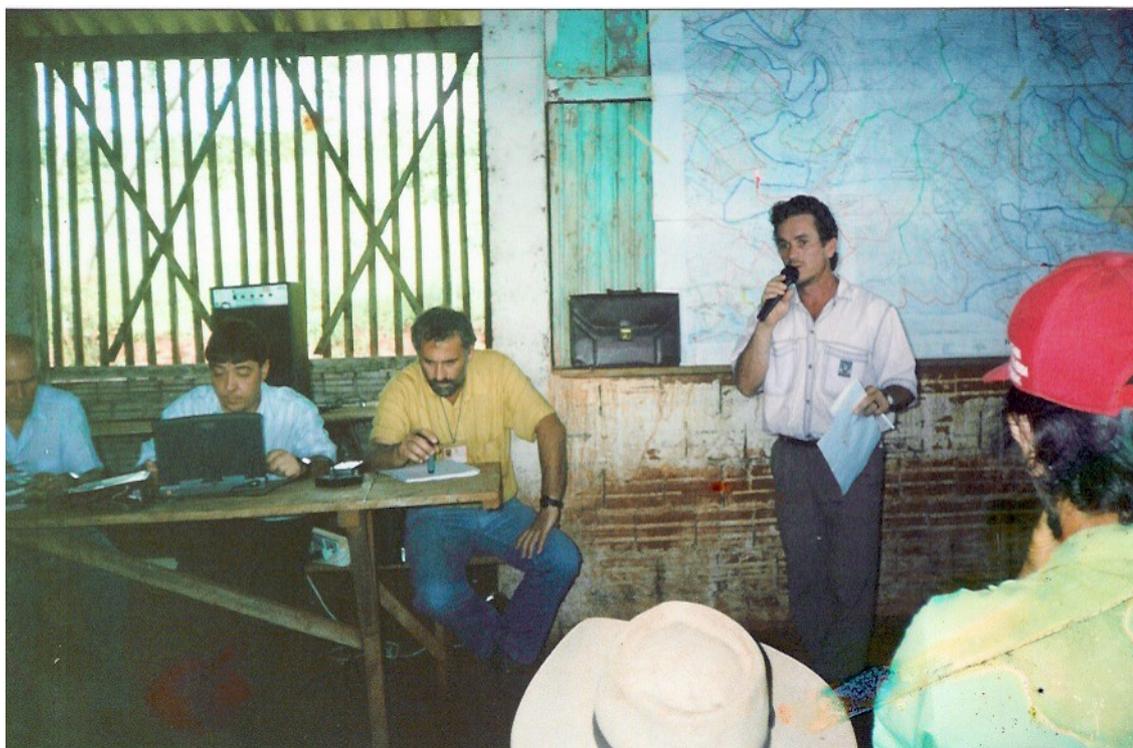


Foto realizada por un agricultor y cedida por la CRABI.

<sup>34</sup> Periódico *Folha de Londrina*, 23/9/1993.

También estaban entre los principales puntos acordados, la garantía de reasentamiento a los pequeños propietarios y arrendatarios con cinco *alqueires* (12,1 hectáreas) o menos, el resarcimiento de las construcciones existentes en la explotación y las etapas secuenciales del pago de las expropiaciones. Para evitar una vuelta atrás que una de las partes se retractara, las reuniones eran formalizadas a través de actas legalizadas ante notario.

### **El proceso de negociación formal y los primeros datos para la formación de reasentamientos**

Con los acuerdos firmados se iniciaron las fases que permitirían la formación de los reasentamientos. Los levantamientos de datos, la puesta en marcha de reuniones que tenían como finalidad acordar los valores a pagar en el acto de la indemnización y la presión de los expropiados para que el proceso interrumpido en diversas circunstancias, no se alargase excesivamente, fueron los hechos más destacados durante los años de 1994 y 1995.

#### *Los levantamientos de datos y la puesta en marcha de los pactos para el pago de la indemnización*

Con el acuerdo puesto en marcha, se inició la primera etapa del proyecto de reasentamiento, con la realización del catastro de los trabajadores rurales y de las propiedades, con la identificación y la medición de las mismas para definir así el tamaño de las áreas que debían ser adquiridas para los reasentamientos y los valores a pagar a los propietarios mayores para que pudiesen adquirir nuevas propiedades.

En lo que concierne a este último aspecto, un acuerdo firmado durante el mes de agosto de 1994, después de muchas negociaciones, definía el importe a pagar sobre las tierras expropiadas. Para el suelo considerado como tipo 1 serían pagados 3.7 mil dólares por cada hectárea; para el suelo tipo 2, sería de 2.9 mil dólares por cada hectárea y para el tipo 3, solamente de 1.7 mil dólares por cada hectárea<sup>35</sup>. Este cálculo se refería a las tierras sin los bienes (casas, instalaciones agrícolas y ganaderas, etc.) que serían evaluados posterior e individualmente.

---

<sup>35</sup> De acuerdo con la clasificación, las tierras de tipo 1 son las de mejor nivel y las demás de niveles inferiores. Fuente: Periódico *Folha de Londrina*, 9/8/1994.

Los propietarios tenían tres opciones: recibir el pago en dinero, recibirlo en dinero con asesoría para la compra de la nueva propiedad, y finalmente el cambio de tierra por tierra, es decir de su propiedad por otra de calidad equivalente. Para el reasentamiento, se proponía la compra de fincas de 16 a 24 hectáreas para cada reasentado.

En el momento de la definición de la cantidad de tierras necesarias para la formación de los reasentamientos, una nueva cuestión pasó a ser discutida: la superficie que debería ser ocupada por cada familia. Los expropiados solicitaban que para este cálculo se utilizase como criterio la fuerza de trabajo familiar. Nuevas discusiones vinieron a colación con el objetivo de establecer lo que cabría a cada miembro familiar, según su edad. Uno de los primeros acuerdos conseguidos fue que los hijos casados que viviesen con los padres y que se dedicasen a las actividades agropecuarias tendrían en el reasentamiento su propia finca de siete *alqueires* (16.8 ha)<sup>36</sup>.

Otro punto acordado después de muchas controversias fue que, con el fin de calcular la superficie a que cada persona tendría derecho en el reasentamiento, la fuerza de trabajo femenina, independiente de la edad debería ser siempre equivalente al la del hombre. Así el único factor que hizo que miembros de la misma familia recibiesen cantidades diferentes y proporcionales a los adultos (entre 15 y 55 años) fue la edad, según se observa en el cuadro 7.3.

**Cuadro 7.3**

**Superficie destinada a cada persona reasentada**

<i>Edad</i>	<i>Fuerza de trabajo (f/t)</i>	<i>Total destinado a cada miembro</i>
Entre 5 y 10 años	0,25 f/t	4,20 ha (1,75 <i>alqueires</i> )
Entre 10 y menos de 15 años	0,50 f/t	8,40 ha (3,5 <i>alqueires</i> )
Entre 15 y menos de 55 años	1,0 f/t	16,80 ha (7,0 <i>alqueires</i> )
Entre 55 y menos de 60 años	0,8 f/t	13,44 ha (5,6 <i>alqueires</i> )
Más de 60 años	0,4 f/t	6,72 ha (2,8 <i>alqueires</i> )

Fuente: Elaboración de la autora a partir de informaciones obtenidas en las entrevistas con liderazgos de la CRABI.

Otro tema consensuado fue la actualización de valores a pagar en las expropiaciones de los agricultores que poseyesen propiedades con extensiones por encima de 12 hectáreas y que

<sup>36</sup> La dimensión de 7 *alqueires* (16.8 ha) por familia fue estipulado considerando, que bajo las características regionales existentes, una superficie menor no sería viable para el mantenimiento de un número significativo de explotaciones.

debido a esto no serían transferidos para los reasentamientos. Éstos con “cartas de crédito” comprarían otras propiedades<sup>37</sup>.

Además de ésta, otra discusión se puso en marcha. Se trataba de las 600 familias que fueron excluidas del proceso de reasentamiento durante la realización del primer levantamiento de afectados, situación ésta que provocó la realización de un nuevo levantamiento considerando solo a estas familias excluidas. Tras obtener más datos, se llegó a la conclusión de que al menos 500 de estas familias tendrían derecho a una finca en uno de los reasentamientos. Como la COPEL solo reconocía el derecho de apenas 250 familias, esa propuesta condujo a nuevas reuniones que intermediadas por diputados y alcaldes posibilitaron alcanzar algunos acuerdos. Acuerdos que poco a poco, permitían a un número mayor de agricultores la posibilidad de que se trasladasen a uno de los reasentamientos y que no se sumasen al gran número de agricultores sin tierras existente en el país.

Con el objetivo de justificar el gasto previsto con el aumento de la superficie de tierras a comprar debido al aumento del número de familias reasentadas, el diputado estatal Nereu Moura, representante de la Asamblea Legislativa del estado de Paraná que fiscalizaba la obra, hizo en aquella ocasión una declaración referente al valor reducido de esas cifras:

“ Os custos para a inclusão das novas famílias é muito pequeno, em relação ao valor da obra, orçada em um bilhão de dólares. O valor das expropriações representa menos de 5% do total a ser reembolsado para a construção da obra”<sup>38</sup>.

Esta información estaba de acuerdo con la justificación presentada por los expropiados siempre que había un enfrentamiento de propuestas sobre la mejora de las condiciones de los expropiados y respecto a los importes a pagar en la expropiación, así como en los momentos de las negociaciones que pretendían ampliar al máximo el número de expropiados con derecho a la tierra en reasentamientos dotados de una infraestructura mínima necesaria para el mantenimiento de los agricultores.

---

<sup>37</sup> Periódico *Gazeta do Paraná*, 11/3/1995, p. 5.

<sup>38</sup> Periódico *Folha de Londrina*, 10/9/1995, p. 6.

*Los nuevos obstáculos y la continuidad de la movilización y de las protestas*

Aunque se había creado un clima de cordialidad con la empresa constructora de la Presa de Salto Caxias, la CRABI como parte del “Movimento dos Atingidos Barragens” (MAB) organizó el 14 de marzo de 1995 juntamente con otros movimientos sociales, un día de protesta nacional contra la construcción de presas hidroeléctricas. En el estado de Paraná la manifestación se realizó en el municipio de Capitão Leonidas Marques en el área de obras de la Presa de Salto Caxias.

El periódico *Folha de Londrina*, al destacar el acontecimiento, transcribió las palabras de los líderes del movimiento en el sentido de que aún significando progreso material, las presas tienen un alto coste social, que podría ser suavizado si se negociaba con las poblaciones afectadas:

“(...) as barragens podem significar progresso material, mas têm um alto custo social que muitas vezes poderiam ser minimizados se os projetos fossem melhor discutidos com as populações diretamente afetadas. Embora, no caso de Salto Caxias, aparentemente os valores a serem pagos sejam satisfatórios e haja diálogo com a Copel, o fato é que ninguém queria sair da terra, mas terá que sair na marra”.

Y el periódico continúa aludiendo a que el inicio de las negociaciones solo fue posible tras las presiones de los expropiados:

“No caso de Salto Caxias, a discussão só foi iniciada quando o projeto já estava definido, e envolve apenas o processo de relocação das famílias. Hoje as relações entre a Copel e a Crabi são relativamente cordiais, com encontros periódicos para avaliação, mas os agricultores tiveram que forçar a abertura de diálogo, ocupando o local do futuro canteiro de obras em agosto de 93”<sup>39</sup>.

A pesar de que había algunos éxitos que celebrar, sin embargo la lentitud generaba preocupaciones con relación a la finalización de la compra de tierras para formar reasentamientos y el traslado inmediato de parte de los expropiados. Hasta aquel momento la Compañía había adquirido solo 2.400 hectáreas de tierra en los municipios de Cascavel, Catanduvas y Campo Bonito, mientras que eran necesarias 17.000 hectáreas para formar los reasentamientos. Debido a esto el cronograma divulgado por la COPEL en septiembre de 1994, tras un año de negociaciones, no coincidía ya con los plazos preestablecidos.

Así que, con el objetivo de presionar para acelerar la compra de las áreas que faltaban se convocaron nuevas manifestaciones. La del día 11 de noviembre de 1995, fue realizada en el municipio de Nova Prata do Iguaçu con la ocupación de las oficinas de la COPEL y

---

<sup>39</sup> Periódico *Folha de Londrina*, 14/3/1995.

simultáneamente representantes de la CRABI se reunían en Curitiba con directores de la empresa constructora.

Una reunión en la que el principal “callejón sin salida” continuaba siendo el número de familias que había de ser beneficiadas con fincas en los reasentamientos, y por consiguiente, el total de tierras a ser adquirido, que según el acuerdo firmado entre las partes, debería ser aprobado por la CRABI.

Otra reclamación y motivo de movilización entre los agricultores, se refería al plazo en que deberían efectuarse las expropiaciones que habrían de ser pagadas a los propietarios de áreas mayores y a la intención de la Compañía de bajar los precios de las tierras que habían sido estipulados en 1994 y ratificados en 1995, ya que las tierras habían perdido parte de su valor debido las dificultades que atravesaba la actividad agrícola. Una decisión inaceptable por parte de los expropiados y que fue aplazada y anulada varias veces, para volver a los precios definidos al principio.

### **La elección de áreas para los reasentamientos y las primeras decisiones sobre la organización de las nuevas comunidades**

Los acuerdos firmados entre la COPEL y la CRABI establecían que los reasentamientos serían destinados a los agricultores que poseyesen hasta 12 hectáreas, y a sus hijos que trabajasen en la agricultura, así como a los medieros y arrendatarios, y que todos recibirían cantidades de tierras que variarían entre 17 y 55 hectáreas productivas, con casas de un mínimo de 68 metros cuadrados, almacén, pocilga, y suelo preparado para la siembra. Inmediatamente después de estos acuerdos empezó la segunda parte del proceso de reasentamiento, es decir la búsqueda de tierras que hiciera posible la formación de estos reasentamientos.

#### *La elección de las áreas para los reasentamientos*

La elección de las áreas destinadas a los reasentamientos tuvo varias etapas. En la primera, técnicos de la Compañía Eléctrica y de la CRABI, visitaban las tierras disponibles, y emitían sus informes, lo que las convertía en potencialmente adquiribles o no. En una etapa posterior,

tras la emisión de los informes técnicos, los agricultores expropiados iban personalmente a conocer las estas tierras y en la mayoría de las veces reforzaban el parecer ya emitido por la CRABI y sus técnicos. Además de visitar y seleccionar las áreas disponibles, la CRABI procuraba también negociar los valores anteriormente establecidos<sup>40</sup>. Después de aprobadas por ambas las partes, las tierras eran adquiridas por el gobierno del estado a través de una licitación. Sobre la elección de las áreas, los agricultores reasentados se pronunciaron señalando la importancia de la unión y de la insistencia en torno a un objetivo común, la calidad de las tierras donde se organizaría el reasentamiento:

“No primeiro momento nós conquistamos de ganhar a terra, eles queriam mandar nós lá para Laranjeiras, estas bandas ... no começo. Fomos brigando, brigando que nós queria na região. Foi daí que saiu a licitação que nós podia escolher e nós escolhemos aqui”.

“Foi feita a licitação, eles (a Copel) queria escolher as áreas pelo preço, o preço mais baixo e daí nos não aceitamos. Foi feita novas manifestações, apareceram novas áreas e esta estava no preço da licitação. Então nós escolhemos esta área para fazer o reassentamento”<sup>41</sup>.

Los entrevistados se refieren al momento del proceso de elección de las zonas donde la empresa responsable de las obras de la presa, y por lo tanto, responsable de la compra del terreno para organizar los reasentamientos, pretendía elegir las tierras disponibles por el menor precio posible. En otras palabras, deseaba comprar áreas con suelos de calidades inferiores y localizadas en otras regiones paranaenses con el objetivo de destinar el menor valor posible para la adquisición de las tierras. Un *impasse* que fue resuelto con la definición de precios a pagar y con la búsqueda de áreas que se encontraban dentro del presupuesto. Una búsqueda que se realizó principalmente por parte de los interesados, lo que demuestra que mejoró considerablemente el poder de elección de estos.

El 20 de diciembre de 1994, en la última reunión del año, en la que estuvieron presentes, además de las dos partes directamente interesadas – COPEL y CRABI, el Grupo de Estudios Multidisciplinar, alcaldes, dirigentes de sindicatos y asociaciones de vecinos, fue aprobado el acuerdo y comunicado de inmediato al gobernador del estado de Paraná. El documento se transformó en decreto de expropiación de las primeras que se utilizaron para la formación de reasentamientos. Se trataba de dos zonas contiguas, que totalizaban 1.450 hectáreas en los

---

<sup>40</sup> Esta negociación fue necesaria debido la desfase del dólar con relación al real, moneda brasileña creada en 1994 y equiparada al dólar. El real, en varios momentos estuvo sobrevalorado, valiendo incluso más que la moneda norteamericana.

<sup>41</sup> Según entrevista con dos agricultores familiares, reasentados, residentes en dos de los tres reasentamientos existentes en el municipio de Cascavel.

municipios de Cascavel y Campo Bonito, y otras tres, con 1.056 hectáreas en el municipio de Catanduvas, con tierras de los tipos 1 y 2, por lo tanto de alta fertilidad<sup>42</sup>.

En todos los casos los agricultores prefirieron tierras llanas, que, al contrario de las que tenían en los municipios donde se encontraban, permitiría la mecanización agrícola. Pero, que también tendrían algunos inconvenientes. Entre ellos la menor cantidad de agua disponible, ya que en las mesetas los cursos de agua y subsuelos freáticos abundan menos que en áreas con pendientes y cercanas a los ríos como era el caso de la localización de las explotaciones expropiadas<sup>43</sup>.

Igualmente fue de suma importancia, el análisis del suelo y la comprobación de su fertilidad, una condición necesaria para el cultivo y que repercutiría en el mantenimiento del agricultor.

La localización de los reasentamientos también constituyó un importante factor a considerar. En todos los casos fueron elegidas áreas situadas en las proximidades de la sede de los municipios e interconectadas con los mismos a través de carreteras en buenas condiciones. En el caso de que la conexión entre el reasentamiento y el área urbana más cercana fuese, en el momento de la compra, solo un camino, se acordó que una de las prioridades sería mejorar las condiciones de éste y transformarlo en una carretera.

A comienzos de 1997 habían sido adquiridas todas las tierras elegidas por los reasentados y consensuadas por la Compañía eléctrica para fines de reasentamiento. Éstas eran, las haciendas *Flamatec*, la mayor de todas con 6.480 hectáreas, la *Refopaz* con 2.400 hectáreas y la *Barater* con 742 hectáreas en el municipio de Cascavel. La *Centenario* con 1.440 hectáreas entre Cascavel y Campo Bonito, la *Varginhas* con 1.407 hectáreas entre Cascavel y Catanduvas, además de áreas en Ibema con 1.730 hectáreas, Catanduvas con 816 hectáreas, Boa Esperança do Iguaçu con 713 hectáreas, Nova Prata do Iguaçu con 912 hectáreas y Três Barras do Paraná con 984 hectáreas. En total algo más que 17.500 hectáreas (figura 7.6).

Para consolidar el proceso de compra de las tierras, el caso más complicado se dio con relación a la hacienda *Flamatec*, debido al interés que el área representaba para la construcción de un aeropuerto de mayor envergadura y mejor equipado que el que existe

---

<sup>42</sup> Según el periódico *O Paraná*, 22/12/1994, p. 8.

<sup>43</sup> Conforme declaraciones de Sergio Ferrazo uno de los técnicos que acompañó el proceso de elección de las áreas.

actualmente. El alcalde de Cascavel, interesado en que el nuevo aeropuerto regional fuese construido en su ciudad, hizo todas las gestiones posibles para que el área se transformase en el aeropuerto.

Los agricultores, que esperaban el momento para trasladarse a las nuevas tierras, muchos incluso con las fincas ya demarcadas, reaccionaron a la insistencia del alcalde. Uno de los entrevistados comentó así el episodio:

“Antes de nós vim pra cá, quando estava quase tudo pronto teve o problema do aeroporto. O prefeito de Cascavel queria construir o aeroporto e atrasou todo o processo nosso. Nos tivemos que ficar lá, esperando a negociação do aeroporto. Até que nós decidimos ocupar a área prá poder resolver o problema, senão teria que fazer uma nova licitação achar uma nova área e iria demorar demais. No lugar onde seria construído o aeroporto, veio um pessoal que já estava pronto e que já sabia qual seria o seu lote. Fizeram um barraco até a casa ficar pronta. Então os lotes que iam pegar o aeroporto a turma vieram né? Nós viemos seguido, depois de 3 ou 4 meses nós viemos também”<sup>44</sup>.

La preocupación de los agricultores y la prisa para trasladarse a la nueva finca estaba relacionada con la preocupación en preparar y cultivar la tierra, además de construir sus viviendas, pues parte de ellos se encontraban en situación precaria, tanto por el largo período en que estaba prohibido cultivar la tierra en que se encontraban, como por la falta de infraestructura que poco a poco se hacia evidente en la región que sería anegada:

“Nós ficamos três anos sem trabalhar. Aqui era nosso, mas ninguém sabia o seu lote e lá não era mais nosso porque a Copel tava construindo. E, távamos em uma área de risco, quando começou a chuvarada a água foi subindo, chegando perto das casas, chovia e levou as pontes embora. Nós necessitava de uma ponte, a nossa saída era por cima de uma ponte, tocou de entrar na água pegar a ponte amarrar, para quando a água abaixasse por de novo no lugar, para nós poder sair de lá”<sup>45</sup>.

A causa de la presión realizada por los reasentados y otras cuestiones políticas, el alcalde no logró su intento, lo que hace que pasados más de cinco años, la región continúe con la polémica: ¿Dónde construir el aeropuerto regional? Un ejemplo más del conflicto que a veces surge entre los intereses colectivos populares (como de estos agricultores) y grupos que controlan la economía regional.

Como consecuencia del proceso de compra de varias extensiones de tierra surgieron diez reasentamientos. Todos localizados entre el municipio de Cascavel y los municipios afectados por el embalse; la mitad de ellos están situados en las márgenes de la carretera BR 277 que une Curitiba con Cascavel y Foz do Iguaçu, extremo oeste paranaense. De los demás, uno se localiza en las proximidades de la carretera BR 369 que une Cascavel con la ciudad de

<sup>44</sup> Entrevista a un matrimonio de agricultores familiares, que con derecho a una finca en los reasentamientos, se mudaron a la nueva propiedad con dos hijos pequeños.

<sup>45</sup> De acuerdo con la entrevista a un matrimonio de agricultores familiares que anteriormente a la expropiación vivían y trabajaban en el municipio de Tres Barras en tierras pertenecientes a sus padres.

Corbélia y Maringa en el norte del estado; el otro se encuentra cerca del área urbana de Cascavel; un tercer reasentamiento está próximo al área urbana del municipio de Três Barras do Paraná en el margen de la carretera PR 471 que une este municipio al de Catanduvras y a la BR 277. Otros dos se sitúan en los municipios de Boa Esperança do Iguaçu y Nova Prata do Iguaçu, permitiendo que parte de los agricultores continuasen residiendo en los mismos municipios en los que residían anteriormente. Algunos datos más generales sobre los reasentamientos se pueden ver en el cuadro n° 7.4 y su localización el mapa de la figura n° 7.6. Otras características serán objeto de estudio en el próximo capítulo.

**Cuadro n° 7.4**  
**Los reasentamientos: localización, superficie, número de familias**  
**y media de extensión de las fincas**

	<i>Reasentamientos</i>	<i>Municipios en que están situados</i>	<i>Superficie (en ha)</i>	<i>N° de familias</i>	<i>Extensión media de la propiedad familiar (ha)</i>
1	Saudades do Iguaçu	Catanduvras	575	44	13,0
2	São Marcos	Catanduvras e Ibema	815	26	31,2
3	Agroibema	Ibema y Campo Bonito	1.994	53	37,5
4	Centenario	Campo Bonito y Cascavel	1.200	43	27,9
5	Santa Bárbara	Cascavel	2.640	88	30,0
6	São Francisco de Assis	Cascavel	6.555	238	27,5
7	Navegantes	Cascavel	740	27	27,3
8	Novo Horizonte	Nova Prata	985	27	36,4
9	N. Sra. dos Navegantes	Boa Esperança	650	22	29,4
10	Três Barras	Três Barras	985	32	30,7
	Total		17.139	600	29,09

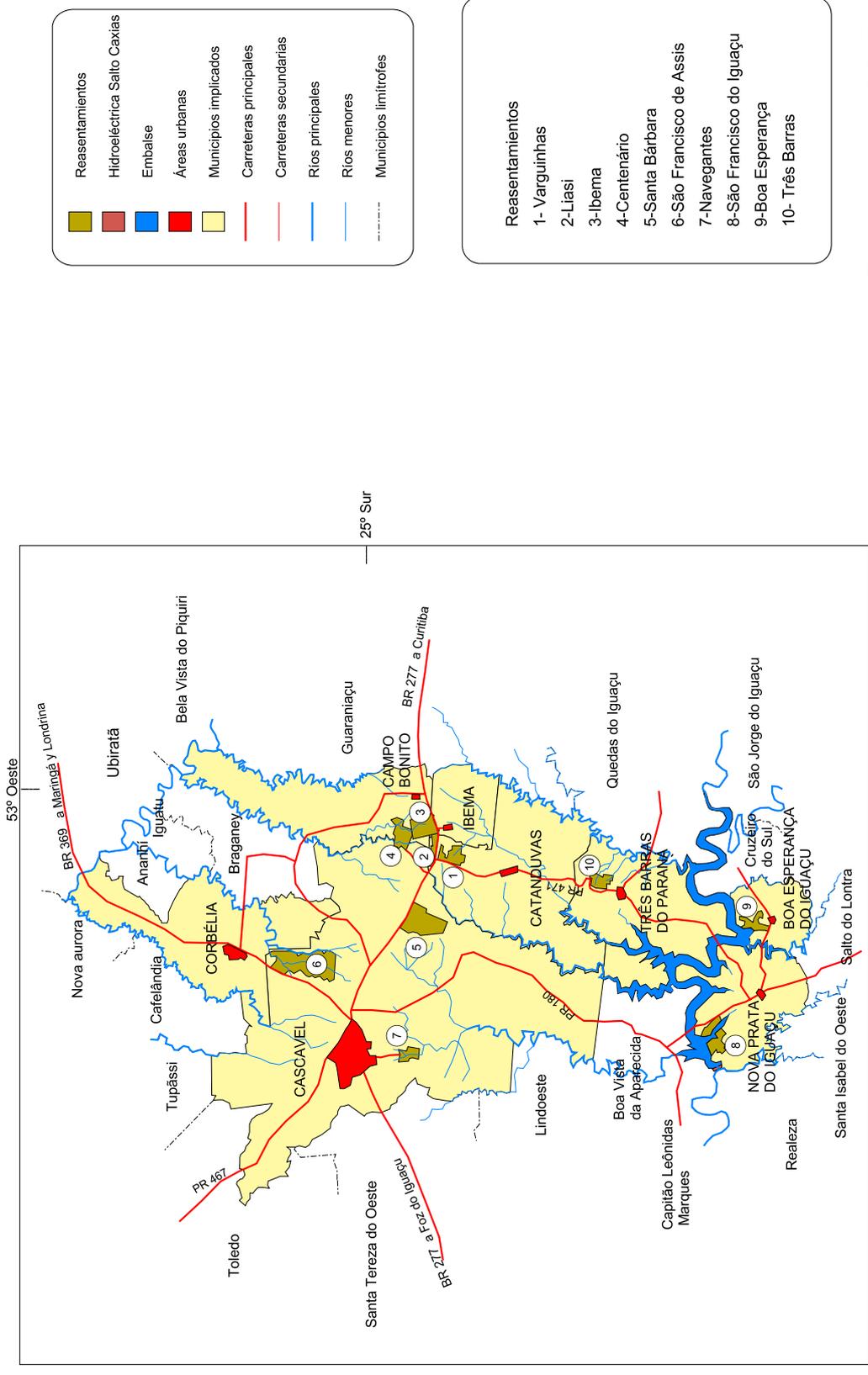
Fuente: Archivo Histórico CRABI.

Además de estas 600 familias que optaron por vivir en los reasentamientos, hubo otras 334 familias que decidieron optar por una carta de crédito y 900 familias que eligieron recibir el importe de sus tierras en dinero para comprar ellos mismos tierras donde les pareciese más conveniente<sup>46</sup>. Pero, lo más importante es que según representantes de la CRABI, el 98 por ciento del contingente de expropiados permanecería en áreas rurales, dedicándose a las

<sup>46</sup> Según datos del Informativo *Cambota* de octubre/noviembre de 1997, p. 6.

actividades agropecuarias, evitando así que los pequeños agricultores se transformasen en “sin-tierras”

Figura 7.6  
Localización de los Reasentamientos CRABI



Escala aproximada 1:1.200.000



Elaborado por la autora a partir de cartas topográficas del Ministerio do Exército, escala 1:50.000, mapa del Estado de Paraná con división municipal (digital) y cartas elaboradas por la COPEL en escala 1:10.000 (papel) y digital.

*Las primeras decisiones en cuanto a la organización de los reasentamientos*

Tras la delimitación de las áreas y con el objetivo de definir la forma como se estructurarían los reasentamientos, el 22 de noviembre de 1997, 250 agricultores familiares se reunieron en el municipio de Tres Barras do Paraná, con representantes de la CRABI y del GEM - Grupo de Estudios Multidisciplinar de Salto Caxias. El objetivo era recibir informaciones sobre las diferentes modalidades de reasentamientos existentes en Brasil, para a partir de las experiencias conocidas elegir el mejor modo de organización del nuevo territorio que iba a ser ocupado. Pretendían “a partir de experiencias vividas y ya puestas en práctica, evitar la repetición de errores cometidos en el pasado en proyectos similares”<sup>47</sup>.

Con el apoyo del equipo que organizó la reunión tuvieron la oportunidad de analizar y discutir sobre las dos opciones de reasentamiento más habituales en Brasil. Una, basada en un modelo de división colectiva de las tierras adquiridas para el reasentamiento, con la creación de agrovillas y la explotación conjunta de la tierra. La otra, en que la tierra sería subdividida individualmente y los agricultores pasarían a vivir en sus propiedades, con el mantenimiento de áreas comunes y con la construcción de equipamientos sociales<sup>48</sup>.

Los reasentados eligieron la segunda opción. Prefirieron administrar la explotación individualmente, como estaban habituados hasta entonces. El cultivo, las áreas de pasto, huerto, almacenes y vivienda serían propiedad individual de cada uno. Los cambios se dieron en otra dirección. Las áreas administradas por cada comunidad son las iglesias, las escuelas, el puesto de salud, el salón social y el área recreativa y deportiva; aunque lo son también el huerto con experimentos biológicos y la reserva forestal que según ley brasileña debe representar un 20 por ciento del total de la explotación.

Otro dato a considerar es que se optó por mantener la misma estructura comunitaria del lugar de origen. Las comunidades ya existentes fueron transferidas manteniendo varios aspectos, entre ellos la misma vecindad, lo que permitió una adaptación más rápida al lugar de destino.

Uno de los coordinadores del proceso lo comentó así:

“As comunidades expropriadas foram transferidas da mesma forma que se encontravam na região de onde vieram, isto quer dizer que los que eram vizinhos lá, continuam sendo vizinhos aqui. Isto na grande

<sup>47</sup> Entrevista realizada en diciembre de 2002, con uno de los técnicos de la CRABI y coordinador del proceso de formación de los reasentamientos.

<sup>48</sup> Periódico *O Paraná*, 23/11/1995, p. 14.

maioria das comunidades. Inclusive neste reassentamento (São Francisco), a maioria das pessoas vieram do município de Três Barras do Paraná<sup>49</sup>.

La reunión también sirvió para negociar directamente con los alcaldes las condiciones de infraestructura de los reasentamientos que estaban siendo formados. Entre las peticiones estaban la construcción de carreteras de acceso, recogida de basura, contratación de personal para trabajar en las escuelas y en los centros de salud. Todos los alcaldes pusieron a disposición de los reasentados los diversos programas existentes en las secretarías municipales ya que tenían interés en que los agricultores se trasladasen a sus municipios, para aumentar así la población rural, la producción de alimentos y por consiguiente la recaudación de impuestos.

De ahí que, tras todo una serie de expropiaciones injustas ocurridas a partir de la década de 1970, que llevó a millares de agricultores familiares a la pérdida de la explotación y a su transformación en un trabajador rural sin tierras o en un trabajador urbano sin cualificación, éste nos parece haber sido uno de los pocos “finales felices”, sucedidos en Brasil en las últimas décadas<sup>50</sup>.

Los resultados que estos agricultores obtuvieron, se debieron ante todo a la organización y la resistencia frente a las medidas estatales que pretendían decidir sus futuros; pero este movimiento social formó igualmente parte de una lucha que ya venía dándose en Brasil últimamente.

Un proceso que tras el establecimiento de la democracia hizo posible la organización sindical, las movilizaciones y la formación de una sociedad más crítica y reivindicativa. La creación del *Movimento Brasileiro de Barragens* (MAB) se dio bajo esta coyuntura, a partir de movimientos regionales ya existentes. Estos factores, unidos a las experiencias anteriores vividas con el caso de la Presa de Itaipu durante la década de 1970, y con la construcción de

---

<sup>49</sup> En entrevista realizada con Sergio Ferrazo en noviembre de 2002.

<sup>50</sup> Un resumen de los problemas enfrentados por los afectados por la formación de embalses en las diferentes regiones brasileñas puede ser encontrado en la obra *Terra sim, barragens não!* Elaborada en el 1º Encontro Nacional de Trabalhadores Atingidos por Barragens, 1989. Bajo el título “O efeito das tecnologias sobre as comunidades rurais: o caso das grandes barragens”, Lygia Sigaud, 1992, hace una comparación de lo que se produjo cuando de la construcción de las principales hidroeléctricas brasileñas: Sobradinho, Tucuruí, Itá y Machadinho. Informaciones específicas sobre la formación del embalse de Sobradinho en el Rio São Francisco se pueden obtener en dos artículos. Uno, “Barragem de Sobradinho Interminable Via-sacra” de Ruben Alfredo de Siqueira. *Tempo e presença*, nº 257 y otro “Barragem de Sobradinho: o desencontro cultural entre camponeses e técnicos do estado”, de Ana Luiza Martins Costa. *Hidrelétricas, ecologia e progresso*. Rio de Janeiro: CEDI, 1990, pp. 55-68. Además, en la Revista *Proposta*, el número 46, 1990 está dedicado al tema Barragens: questão ambiental e luta pela terra.

otras presas en el sur de Brasil en la última década, fueron fundamentales para fomentar la organización colectiva de los agricultores en el momento en que la construcción de una presa se hacía realidad.

Así pues, tras un período de relaciones conflictivas con la empresa constructora de la obra de Salto Caxias, el estado de optimismo por parte de los expropiados y de la sociedad que los apoyó fue grande, porque de esta vez el proceso de expropiación y de traslado de las familias que vivían en el área que iba a ser anegada fue menos traumática de lo que normalmente solía ser.

Para comprobar esta realidad, nos remitimos a los periódicos del estado de Paraná que desde finales de 1995, cuando el proceso ya se encontraba en una fase de negociaciones bastante adelantada, trataban del asunto del embalse de Salto Caxias, centrando sus reportajes en dos grandes temas. Uno de ellos mencionaba que las reuniones que establecían los acuerdos para el reasentamiento de las familias continuaban, pero que algunas cuestiones tardaban en definirse; y el otro, que el proceso que estaba ocurriendo con la construcción de la Presa de Salto Caxias cambiaba la historia de las expropiaciones. El periódico dice:

“O processo de desapropriação de duas mil famílias de agricultores para a construção da Usina Hidrelétrica de Salto Caxias, no Rio Iguaçu começa a configurar um novo panorama na história das desapropriações e caminha para ser o primeiro caso na história do Paraná a produzir resultados satisfatórios aos envolvidos. Esta mudança de cenário na história das desapropriações ocorre principalmente porque a constituição de 1988 estabeleceu a necessidade de se produzir o Relatório de Impacto do Meio Ambiente (RIMA), antes da definição de áreas para a construção de projetos como o de Salto Caxias. Técnicos e especialistas que conhecem profundamente os grandes traumas causados pelas desapropriações como as de Itaipu, Salto Segredo e Salto Osório, todas no Estado do Paraná entendem que outros fatores foram decisivos para se chegar a esse resultado. Um deles é o movimento nacional por parte dos atingidos por barragens que exigia maior atenção aos expropiados. O movimento nasceu das desastrosas desapropriações feitas para a construção de Itaipu e ganhou notoriedade a nível nacional. O movimento dos desalojados pela Usina Hidrelétrica de Itaipu foi a semente para o Movimento dos Sem-Terra no Brasil”<sup>51</sup>.

Basándome en estos hechos estoy de acuerdo con Scherer-Warren (1996) cuando menciona que “el ideal básico que da sustancia a las acciones de los movimientos sociales es la creación de un nuevo sujeto social, lo que redefine el espacio de la ciudadanía.” Y que “el sentimiento de una triple exclusión relativa - económica, política y cultural/ideológica - siempre presente en la historia brasileña, y que se acentuó considerablemente durante los años más duros del régimen militar, está en el seno de los movimientos que se van organizando”<sup>52</sup>.

<sup>51</sup> Periódico *Gazeta do Povo*, 10/9/1995, p. 7.

<sup>52</sup> Scherer-Warren, 1996, p. 53-54.

Creo que es importante además afirmar que lo más relevante en estos movimientos es la defensa al derecho de participar de las decisiones comunitarias que afectan al destino de sus miembros. Un hecho que en este caso nos parece evidente, es que las sucesivas reuniones permitían, además de la discusión, la elección democrática de la decisión a tomar.

Una mezcla de reivindicaciones y derechos que Eunice Durhan (1984) considera como surgido de un cambio de necesidades y carencias entre los participantes de los movimientos sociales, y que lleva a un amplio proceso de revisión del espacio de ciudadanía, basado en un conjunto de derechos conquistados a partir de una actuación política más directa. Dicho en sus palabras:

“transformação de necessidades e carências em direitos, que se opera dentro dos movimentos sociais, e que pode ser vista como um amplo processo de revisão e redefinição do espaço de cidadania (...). Parece que estamos vivendo um processo de construção coletiva de uma nova cidadania, definida por um conjunto de direitos, tomados como auto-evidentes, que é pressuposto da atuação política e fundamento de avaliação da legitimidade do poder”<sup>53</sup>.

Tras estas consideraciones sobre el movimiento a partir del cual se originó, en un primer momento, la posibilidad y a posteriori la realidad de los reasentamientos, analizaremos en los capítulos siguientes la forma de organización y de mantenimiento de estos agricultores familiares. En los próximos capítulos estudiaremos, además de la forma de organización, la infraestructura instalada en los reasentamientos y como ella contribuye al mantenimiento de estos agricultores.

---

<sup>53</sup> Eunice Durhan, 1984, p. 20.